

★ ★ ★ ★ ★

**TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE
AMERICA GREAT AGAIN
TLCAGA**

★ ★ ★ ★ ★

TEMA DEL MES



La Jornada *del campo*

Suplemento informativo de *La Jornada*
17 de junio de 2017 • Número 117 • Año X

COMITÉ EDITORIAL

Armando Bartra
Coordinador

Lourdes E. Rudiño
Subcoordinadora

Enrique Pérez S.
Hernán García Crespo

CONSEJO EDITORIAL

Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

Publicidad
lajornadadelcampo@gmail.com

Diseño Hernán García Crespo **CAJA**
TIPOGRÁFICA

La Jornada del Campo, suplemento mensual de *La Jornada*, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300. Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título *La Jornada del Campo* número 04-2008-121817381700-107.



PORTADA: *La Jornada del Campo*

MIRARALSUR

Se cedió para evitar una catástrofe

Juan Cortina Gallardo, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcohólica

La manera como México acaba de negociar con Estados Unidos los términos del intercambio comercial en materia de edulcorantes, que resultó vergonzosa y lesiva para los agricultores y los industriales del ramo, es una señal más del rumbo nefasto que previsiblemente tomará la inminente discusión tripartita sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Entonces, más que concentrarnos en aspectos puntuales de una renegociación impuesta por Trump y en la que estaremos representados por un gobierno claudicante, de modo que hagamos lo que hagamos de antemano sabemos que el resultado será regresivo y antinacional, puede ser útil reflexionar sobre las posibles salidas al entrapamiento –no sólo comercial– en el que desde hace rato estamos los mexicanos y que se agrava con el viraje en el gobierno de Estados Unidos.

México es un fósil, una pieza de museo; un país que se quedó pasmado en el neoliberalismo clásico mientras los demás lo desertan. Lo inauguró Carlos Salinas, del PRI, lo prolongó Ernesto Zedillo, lo continuaron Vicente Fox y Felipe Calderón, del PAN, y el gobierno de la restauración que es el de Peña Nieto lo retoma con un entusiasmo tal, que pareciera que el neoliberalismo

fuese un modelo del año cuando es una carcacha desbielada.

El discurso neoliberal y sus promesas de que la riqueza gotearía hasta los más pobres, comenzaron a pasar aceite desde fines del XX. Y pronto a la crítica de los conceptos siguió lo más importante: la crítica en los hechos, la crítica práctica. Sobre todo en *Nuestamérica*, una región donde los daños del capitalismo canalla y desmecatado habían sido mayores.

Primero fue el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, un gobierno que de arranque tomó distancia de Estados Unidos y se desmarcó del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y a Venezuela siguieron Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Nicaragua... países en los que la izquierda ganó las elecciones y donde se establecieron gobiernos progresistas.

Y desde entonces los mexicanos más o menos avisados miramos hacia el sur. Observamos con atención lo que ocurre en un subcontinente donde en algo más de tres lustros se reinventó la manera de hacer la revolución. Un modo que venía desde la francesa de 1798 y que, pasando por la rusa de 1917 y las que en el siglo XX le siguieron, había cristalizado en un paradigma subversivo consistente en el derrocamiento violento del gobierno conservador, ejecuciones sumarias, expropiaciones, desquiciamiento de la economía, hambruna y en lo político dictadura revolucionaria.

Lo ocurrido en el Cono Sur en los años recientes demuestra que se puede cambiar sustancialmente el rumbo de un país mediante una combinación de movimientos sociales y triunfos electorales, es decir ganando la calle y ganando en las urnas: creando poder abajo y al mismo tiempo poder arriba. Y se ha visto, también, que mediante la recuperación por el Estado del control sobre los recursos naturales y de una parte mayor de las rentas que generan, se puede mejorar rápidamente la situación de la gente por medio de la generación de empleos, salarios más altos y gasto social. Redistribución justiciera del ingreso que define a las conosureñas como revoluciones de bienestar.

Por último hay que decir que las revoluciones del subcontinente han sido hasta ahora notablemente incruentas y por lo general respetuosas del pluralismo político electoral. Lo que es notable sobre todo si las comparamos con las sangrientas, dolorosas y autoritarias revoluciones del siglo pasado.

Y en eso estábamos, mirando al Sur, cuando el resultado de las elecciones en Estados Unidos nos obligó a voltear al Norte. Porque lo que ahí ocurrió fue inesperado. Los verdaderos protagonistas de los últimos comicios fueron Donald Trump, un *outsider* del Partido Republicano, y Bernie Sanders, un *outsider* del Demócrata, mientras que Hillary Clinton, que representaba la continuidad del *establishment* fue no sólo derrotada sino marginada. La confrontación ideo- →



Los ex presidentes de Ecuador, Rafael Correa; Argentina, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner; de Brasil, Luiz Inácio, Lula, da Silva, Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, y de Venezuela, el ya fallecido Hugo Chávez, con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. La foto es de 2007, durante la firma del Acta Fundacional del Banco del Sur.

FOTO: República de Argentina

BUZÓN DEL CAMPO

Te invitamos a que nos envíes tus opiniones, comentarios y dudas a
jornadadelcampo@gmail.com

twitter.com/jornadadelcampo
facebook.com/La Jornada del Campo
issuu.com/la_jornada_del_campo

→ lógica significativa ocurrió, entonces, entre dos discursos antineoliberales, uno de derecha y otro de izquierda. Y ganó el de derecha. Ganó Trump.

De los dichos y hechos de Trump como presidente se desprende, sin lugar a dudas, que pese a su parloteo anti *establishment* y anti libre comercio, el *showman* de la Casa Blanca no ofrece una real salida al neoliberalismo. Al contrario, el suyo es un discurso capitalista tan canalla como el anterior pero con proteccionismo. Proteccionismo del peor, que es el avasallante proteccionismo de gran potencia. Y si el neoliberalismo clásico era predador de la naturaleza, pero la presión social lo había obligado a establecer ciertos candados ambientales, Trump simplemente niega el cambio climático y en la lógica de crecimiento a toda costa está decidido a desregular. Lo que tendrá un impacto global enorme, pues si en suelo estadounidense las empresas pueden contaminar libremente, la competencia obligará a otros Estados a hacer más laxas sus regulaciones ambientales. Y de ahí al fin del mundo... Por lo demás Trump es más intervencionista, más belicista, más racista y más sexista que los peores neoliberales.

Conforme vamos viendo el comportamiento de Trump, nos va quedando claro que el antineoliberalismo de derecha no es más que un recurso de las corrientes políticas más conservadoras para capitalizar el descontento de los pobres y las capas medias con el polarizador modelo imperante desde los años 80's. Discurso demagógico que, paradójicamente, al llevarse a la práctica desquicia el de por sí precario orden económico y político establecido en las décadas recientes. Un sistema ciertamente injusto y disfuncional, pero que al desestabilizarse catastróficamente conduce no a la justicia y la armonía sino al caos, a la ley de la selva en medio de la ley de la selva. Las críticas al sistema desde lo peor del sistema –que son las que esgrime la nueva derecha no sólo en Estados Unidos sino también en Europa– se parecen mucho las del nacionalsocialismo hitleriano de modo que no resulta forzado calificar de neonazis a Trump, Le Pen y otros de su misma calaña.

Estacionados en el neoliberalismo más rancio y ramplón, que es el del gobierno de Peña, los mexicanos debemos optar entre el emergente antineoliberalismo fascioide del Norte y el antineoliberalismo progresista que sigue vivo en el Sur. Aunque trate de aparentar lo contrario, lo cierto es que Peña Nieto ya eligió llevarla bien con Trump, pues en verdad a los intereses y al sistema que representa no les queda de otra. En cambio los demás, las mayorías, el pueblo pues... debiéramos volver de nuevo la vista al Sur. Una región donde por la vía del posneoliberalismo progresista se empieza a vislumbrar un inédito poscapitalismo en la línea de lo que algunos llaman socialismo comunitario y otros sociedades del buen vivir.

Y quien diga que en el Cono Sur el sueño ha terminado, pues se perdieron Argentina y Brasil mientras que Venezuela está contra las cuerdas, no entiende nada. En revolu-



ciones con pluralismo político la izquierda puede perder elecciones o sufrir golpes parlamentarios sin que esto signifique forzosamente que se canceló el proceso transformador... La condición es que los pueblos se hayan apropiado de sus nuevos derechos, es decir que los ejes del proyecto posneoliberal se hayan vuelto sentido común. Y esto es lo que estamos viendo en Argentina y Brasil, donde la gente está en las calles defendiendo lo ganado en los años anteriores. De modo que los ultraderechistas Macri y Temer tienen el gobierno pero no tienen el poder y no es fácil que puedan imponer todas sus contrarreformas.

Si las cosas siguen por ese camino y si en 2018 la izquierda gana las elecciones en México –y quizá en Colombia–, sin duda el llamado ciclo progresista cobrará nuevo vigor. Y posiblemente las transformaciones hasta ahora posneoliberales entrarán en una fase algo más poscapitalista. Porque la profundidad de las mudanzas no depende tanto de las ganas como de la correlación de fuerzas.

Pero para que esto suceda no estaría de más recuperar algunos aprendizajes conosureños:

1. El cambio verdadero resulta de una combinación de movimientos sociales frecuentemente sectoriales o regionales que sin embargo ponen en crisis al viejo régimen y opciones electorales partidistas que ofrecen una perspectiva política nacional y estratégica.

2. Los movimientos populares se dan por oleadas, mientras que el cambio social es un proceso continuo y prolongado, de modo que por ser más estables los gobiernos progresistas devienen actores protagónicos y deben ser capaces de mantener el curso que les mandaron tanto el sufragio como el movimiento social. Sin olvidar que por naturaleza los movimientos populares son antigobier-nistas de modo que cuando gobierna la derecha tienden a ser de izquierda y de derecha cuando gobierna la izquierda.

3. Los Estados nacionales son escenarios privilegiados de la lucha por salir del neoliberalismo y marchar hacia el poscapitalismo, pero en un mundo globalizado el cambio progresista no es viable en un solo país. Espacios multinacionales como ALBA, Unasur, Mercosur, Caricom son aportes fundamentales del visionario Hugo Chávez. Y aunque hoy tales instancias anden de capa caída por la derechización temporal de los gobiernos de Brasil y Argentina y las dificultades de Venezuela, el bolivarianismo sigue estando en el horizonte subcontinental.

4. No veo un futuro cambio progresista sin pluralismo político electoral. Lo que significa que la izquierda tendrá que probarse reiteradamente en elecciones. Y si el pluralismo no es sólo de palabra, deberá estar dispuesta a perder el gobierno, tanto el Ejecutivo como la mayoría legislativa. Pero perder el gobierno no necesariamente es perder el poder. No cuando el proyecto progresista devino hegemónico,

como lo muestra el ascenso de las luchas populares en Argentina y Brasil.

5. Impulsar el cambio progresista con pluralismo comicial y sin dictadura revolucionaria significa que la izquierda gobernante ha de cumplir sus promesas y no debiera ofrecer en las elecciones lo que como gobierno no podrá materializar. Los ofrecimientos políticos de la izquierda: libertad, dignidad, democracia, reconocimiento de derechos... son relativamente fáciles de honrar. Los ofrecimientos económicos, en cambio, son cuesta arriba, sobre todo en países tronados como el nuestro y en tiempo de vacas flacas como los que corren. Las mudanzas sociales conosureñas de los primeros lustros del siglo XX configuraron revoluciones de bienestar porque los gobiernos progresistas recuperaron parte de las rentas y los precios de las materias primas que exportaban eran altos. Pero, además de que la extracción como palanca del desarrollo no es sostenible, hoy las *commodities* cayeron, de modo que las revoluciones –las nuevas y las viejas– tendrán que ser de austeridad, sin que esto las lleve a perder el apoyo de las mayorías y a ser derrotadas en las elecciones. El reto es nuevo porque también los tiempos lo son. Habrá que hacer camino. ☛

A. Martha

NUEVAS FORMAS DE COOPERACIÓN PARA MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Esta edición, 117, de *La Jornada del Campo* está dedicada fundamentalmente a las deliberaciones que tuvieron lugar en el Encuentro de Organizaciones Sociales Canadá, Estados Unidos, México. Por Nuevas Formas de Cooperación Internacional, celebrado el 26 y 27 de mayo de 2017 en el Palacio de la Escuela de Medicina, también conocido como Antiguo Palacio de la Inquisición, en el centro de la Ciudad de México.

En este encuentro se dieron cita representantes de la sociedad civil de los tres países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), incluidos académicos y representantes agrícolas y sindicales, así como de organizaciones ambientalistas y de migrantes. Allí discutieron formas alternativas de relación internacional. *La Jornada del Campo* ofrece aquí algunas de las ponencias presentadas y entrevistas a varios de los participantes.

LAS ORGANIZACIONES Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE MÉXICO DEMANDAMOS LA SUSTITUCIÓN DEL TLCAN

PROCLAMA DE ORGANIZACIONES MEXICANAS EN EL ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES CANADÁ, ESTADOS UNIDOS, MÉXICO. POR NUEVAS FORMAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Ante el inminente proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las organizaciones y movimientos de la sociedad civil de México agrupadas en la Convergencia de Organizaciones y Movimientos Sociales México Mejor sin TLCs nos pronunciamos por la sustitución de dicho tratado porque ha afectado gravemente el desarrollo nacional, siendo contrario a los intereses de los pueblos, del medio ambiente y de nuestro sistema democrático. Además, estos tratados de libre comercio han fracasado políticamente por no haber cumplido con las promesas y expectativas de prosperidad anunciadas para los trabajadores del campo y la ciudad, provocando una severa crisis social.

Por lo tanto, nos pronunciamos por abrir un proceso democrático, participativo e incluyente para la construcción de un nuevo acuerdo de cooperación trinacional sustentable y sostenible, que además promueva verdaderamente el desarrollo nacional e impacte de manera directa en el mejoramiento de los salarios, en el nivel de vida de los campesinos, en el bienestar de los pueblos, en la soberanía alimentaria, los derechos humanos -especialmente los derechos de los migrantes- y proteja de manera efectiva el medio ambiente.

El TLCAN ha sido fuente de pobreza y desigualdad, despojo y depredación de los recursos naturales y de los territorios de campesinos e indígenas; ha violado sistemáticamente los derechos humanos y ambientales de manera permanente; ha permitido el crecimiento de un poder supranacional de las grandes corporaciones, excluyendo a la mayor parte de la sociedad. Su renegociación significaría la consolidación de un sistema comercial donde las empresas se apropiarían aún más de las riquezas de nuestros pueblos y explotarían las circunstancias a su favor para someter a nuestros países. Al mismo

tiempo, el tratado pretende la confrontación entre nuestros pueblos en beneficio del capital y exacerba la xenofobia y la discriminación contra los migrantes.

Insistimos, no estamos en contra del intercambio y los acuerdos económicos internacionales, de lo que se trata es de desarrollar nuevos modelos de cooperación, complementación e intercambio internacional basados en la justicia y la equidad social, la solidaridad y los más altos estándares ecológicos por lo que reivindicamos el derecho de los pueblos al desarrollo, a los derechos laborales de los trabajadores y los derechos humanos, que son de carácter universal.

El TLCAN ha logrado que la economía mexicana sea preponderantemente dependiente de la economía estadounidense; que las formas de degradación del medio ambiente lleguen a extremos tales que grandes porciones del territorio no puedan ser habitados; que el agua de los ríos se convierta en tóxica; que las comunidades sean despojadas de sus tierras y recursos territoriales; que la precarización del trabajo llegue al extremo en que cada día haya más trabajadores sin salario o que pagan por trabajar, ahora hay más trabajo forzado; se ha reforzado el sistema de control corporativo sobre la clase trabajadora; se ha conseguido concentrar aún más la riqueza aumentando las desigualdades, así como la descomposición social y la violencia, desde el Estado y la delincuencia organizada.

Todo acuerdo comercial debe basarse en el desarrollo de los mercados internos y en la creación de trabajos decentes y salarios dignos para todos, sin importar la nacionalidad de los trabajadores; garantizar aumentos salariales consistentes que recuperen la pérdida del poder adquisitivo -al menos- de los últimos 23 años en que ha estado vigente el TLCAN; recuperar la soberanía nacional respetando a los pueblos y los te-

rritorios campesinos e indígenas; garantizar que la seguridad social y los servicios públicos de calidad lleguen de manera eficiente a toda la población; así como el cuidado del medio ambiente y la rehabilitación del mismo en los casos que sea necesario.

La competitividad de México en la región no puede fortalecerse con base en los bajos salarios, malas condiciones de trabajo, despojo y depredación de nuestros recursos naturales y una cada vez más laxa regulación ambiental. Tampoco la competitividad en Estados Unidos debe fundarse en la sobre-explotación de los migrantes, la violación de sus derechos humanos y un trato indigno, independientemente de que sean documentados o no. Cualquier nuevo acuerdo debe incluir la resolución duradera de esta injusticia social con los migrantes.

El actual gobierno mexicano carece de autoridad moral para encabezar cualquier negociación en nuestro nombre, por lo que todas las negociaciones comerciales deben abrirse a la participación amplia y plural de la sociedad civil, sin simulaciones a través de las organizaciones controladas por el gobierno. Esto implica el desmantelamiento del sistema de control corporativo sobre la clase trabajadora, así como la publicación previa de los textos y la construcción de mecanismos de intercambio de información, participación social y deliberación. Queremos una deliberación pública, abierta y transparente de los acuerdos comerciales y que se sometan a consulta de nuestros pueblos.

La Convergencia de Organizaciones y Movimientos Sociales México Mejor sin TLCs, que representa a los sindicatos, a campesinos y campesinos, a los pueblos indígenas, a las organizaciones ambientalistas, a los colectivos de derechos humanos, a movimientos de defensa de los territorios y contra la minería a cielo abierto, a grupos religiosos y otras orga-

nizaciones de la sociedad civil, hemos colaborado desde el inicio del TLCAN y estamos ratificando nuestro compromiso de trabajar conjuntamente, por lo que llamamos a los pueblos de los tres países a construir un movimiento amplio y diverso, que desarrolle una estrategia de movilización, propuesta e interlocución política para lograr una mayor incidencia en el rumbo de la globalización, en las políticas públicas y en la construcción de alternativas de desarrollo sustentable como alternativa al modelo neoliberal del libre comercio.

POR LO EXPUESTO REITERAMOS NUESTRA POSICIÓN:

¡NO! a este modelo de relación comercial que ha tenido resultados nocivos en materia ambiental, que ha estimulado la deforestación a manos del avance descontrolado de la frontera agrícola y propiciado un aumento en la generación de desechos tóxicos, contaminación del agua y emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros impactos. Además del bajo crecimiento durante varias décadas, creciente desempleo, precarización del empleo, expansión de la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y profundización de las asimetrías entre nuestros países.

Las propuestas de las organizaciones y los movimientos sociales aglutinados en la Convergencia de Organizaciones y Movimientos Sociales México Mejor sin TLCs y que ponemos a consideración de este Encuentro Trinacional son las siguientes:

1. Impulsar campañas globales contra el actual modelo de libre comercio partiendo de un amplio diálogo social plural y democrático al interior de cada uno de nuestros países y en las Américas, particularmente con las expresiones más progresistas y democráticas de la sociedad estadounidense y canadiense, en torno a modelos de integra-

ción alternativos que revertan la precarización del empleo y que garanticen el pleno respeto a los derechos laborales, económicos y sociales; que recuperen la soberanía alimentaria, que respeten los derechos de los pueblos originarios, que prohíban la minería tóxica, y por la construcción de formas superiores de cooperación e integración económica para el desarrollo incluyente y en paz de las diversas regiones del mundo.

2. Consensar una postura y estrategias comunes frente a la inminente renegociación del TLCAN, impulsando todos los procesos unitarios con las fuerzas políticas y sociales, nacionales e internacionales, concertando acciones comunes para encarar la actual crisis y las crecientes amenazas que atentan contra el derecho al desarrollo.
3. Avanzar en la construcción de una visión común sobre formas y alternativas de integración y cooperación regional de carácter integral que comprendan las dimensiones política, económica, social, ambiental y democrática.
4. Relanzar un proceso de rearticulación estratégica de organizaciones y movimientos sociales y civiles de Canadá, Estados Unidos y México capaz de organizar a las resistencias e impulsar la construcción de alternativas para todas y todos; sólo así dicho movimiento social trinacional podrá encarar los actuales retos y amenazas en la región.

¡POR EL DERECHO AL DESARROLLO Y LA PROSPERIDAD DE LOS PUEBLOS!

¡POR LA GLOBALIZACIÓN DE LOS DERECHOS!

¡POR NUEVAS FORMAS DE COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL!

DECLARACIÓN POLÍTICA DEL ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE CANADÁ, ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO

POR NUEVAS FORMAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Las y los participantes en el Encuentro de Organizaciones Sociales de Canadá, Estados Unidos y México, ante el inminente proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), condenamos este modelo porque ha afectado gravemente el desarrollo nacional, siendo contrario a los intereses de los pueblos, del medio ambiente y de nuestro sistema democrático. Además, los tratados de libre comercio han fracasado políticamente por no haber cumplido con las promesas y expectativas de prosperidad anunciadas para los trabajadores del campo y la ciudad, detonando una severa crisis social.

Apostamos por la construcción de un nuevo modelo de integración, cooperación e intercambio entre los países, que garantice la participación democrática de la sociedad en la negociación de cualquier acuerdo, que sea transparente en todos sus términos y condiciones y que, con base, en la cooperación internacional y la soberanía de cada país, promueva la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales, regionales y locales, con pleno respeto a los derechos humanos, políticos, económicos, sociales, culturales y del medio ambiente. Además, debe garantizar el trabajo digno y el salario remunerador, independientemente del origen o condición migratoria.

Ya que desde la implementación del TLCAN en 1994, los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente en los tres países han sufrido, mientras que los inversionistas ricos, las grandes corporaciones y sus ejecutivos han cosechado más ganancias y han adquirido más derechos y poder. Ese poder ha tenido un efecto negativo en nuestras democracias.

Cualquier tratado comercial debe revertir estas tendencias innegables y conducir hacia un desarrollo sustentable, sostenible y ampliamente compartido en toda América del Norte.

Hasta ahora, no son alentadores los signos de que un nuevo TLCAN contribuya a las necesidades de las personas y las comunidades de América del Norte y al medio ambiente que todos compartimos. Varios funcionarios en Estados Unidos han mencionado utilizar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) como punto de partida, para su revisión, aunque los trabajadores y las comunidades se oponen ampliamente al TPP con argumentos concretos y buenas razones.

Las organizaciones, los movimientos de la sociedad civil y las comunidades originarias rechazamos no sólo los detalles técnicos del actual TLCAN y los posteriores acuerdos comerciales dirigidos por Estados Unidos en las Américas, sino también las posiciones beligerantes, militaristas, xenófobas y misóginas del presidente Trump. Por lo que exigimos la plena vigencia del derecho internacional y la no intervención para garantizar la paz mundial.

Nos oponemos a los muros fronterizos en América del Norte y defendemos los derechos humanos y laborales de las personas que emigran, así como su derecho a no ser obligados a emigrar por la pobreza y la inseguridad.

Por estas razones, cualquier Tratado y proceso de negociación debe:

- 1) Avanzar en un proceso transparente, democrático y participativo en el que participen los pueblos y el Poder Legislativo de cada país.
- 2) Incluir en el texto del acuerdo normas laborales y ambientales claras y efectivas, vinculantes y ejecutables, con plazos que se cumplan y que vayan más allá de los estándares internacionales establecidos.
- 3) Eliminar los privilegios de los inversionistas extranjeros, así como el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estado (ISDS), y respetar el derecho de los pueblos a ejercer controles democráticos sobre las políticas públicas en cada país.
- 4) Establecer normas vinculantes que garanticen la preponderancia de los Derechos Humanos con base en los acuerdos y Pactos Internacionales.
- 5) Instaurar políticas integrales de género, que garanticen la equidad y la no discriminación como principios transversales, así como la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.
- 6) Garantizar la participación y el consentimiento previo e informado de las comunidades y los pueblos originarios, con el fin de respetar la soberanía de los pueblos sobre sus recursos, sus territorios y sus culturas.
- 7) Incluir medidas en la legislación y prácticas que aumenten los salarios y el acceso al trabajo decente en los tres países, promoviendo la democracia y la libertad sindical y la negociación colectiva transnacional en los casos en que un empleador opere en dos o más países.
- 8) Garantizar la educación pública, gratuita, en todos los niveles como un derecho social, indispensable en la construcción de sociedades democráticas, con justicia social y para la emancipación de nuestros pueblos y la exclusión de la educación de los tratados de libre comercio, pues no es una mercancía.
- 9) Impulsar una política industrial en América del Norte, que proteja de manera efectiva una producción compartida, aumentando los requisitos cuantitativos para las reglas de origen y fortaleciendo el monitoreo para garantizar el origen de la región de América del Norte de componentes en industrias claves.
- 10) Salvaguardar la soberanía alimentaria, los mecanismos de gestión de la producción y su abastecimiento, la subsistencia rural y el derecho a saber qué hay en nuestra alimentación y cómo y dónde se produce.
- 11) Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad: la educación, la salud, la seguridad social, la energía, el agua, etcétera. Proteger los derechos de las naciones a expandir la propiedad pública de los recursos y los servicios.
- 12) Incluir compromisos compartidos sobre los derechos de los trabajadores migratorios y los pueblos indígenas y mecanismos ejecutables para protegerlos, así como, garantizar su organización sindical.
- 13) Rechazar los capítulos de propiedad intelectual y comercio electrónico por violar los derechos de libertad de expresión, privacidad y acceso al conocimiento y medicamentos. Preservar un internet libre y abierto integralmente, evitar la criminalización de los usuarios finales e impedir que los derechos de autor sean mecanismos de usura.
- 14) Incorporar compromisos compartidos para mejorar la infraestructura pública y la sostenibilidad, en los tres países, promoviendo la justicia fiscal a través de impuestos justos, equitativos y progresivos sobre los beneficios.
- 15) Incluir obligaciones fuertemente vinculantes y ejecutables para enfrentar el cambio climático, la deforestación, la contaminación del aire y el agua, las emisiones de gases de efecto invernadero, así como preservar la propiedad social de bosques, tierras, la biodiversidad y el agua. Se debe requerir a cada país que cumpla con su contribución determinada para el acuerdo de París sobre cambio climático.



FOTO: Edgardo Mendoza / ANEC

Las organizaciones de la sociedad civil de América del Norte no aceptarán un TLCAN tóxico y cooperarán a través de las fronteras para monitorear, movilizar, educar, abogar y exigir que estos objetivos sean conquistados.

Fortaleceremos nuestro compromiso de trabajar conjuntamente e implementar un plan de acción trinacional; que incluirá un conjunto de manifestaciones, movilizaciones, campañas, declaraciones políticas y el uso de todos los recursos jurídicos, políticos y de cabildeo necesarios para lograr un nuevo modelo de comercio que anteponga a los pueblos y al planeta por encima de las ganancias de las corporaciones.

Con base en lo expuesto, convocamos a los pueblos de los tres países a construir un movimiento amplio y diverso, que desarrolle estrategias de movilización, propuesta e interlocución política para lograr una mayor incidencia en el rumbo de la globalización, en las políticas públicas y en la construcción de alternativas de desarrollo sustentable. 🌱

NUEVAS CONDICIONES DE INTERCAMBIO, DEMANDAN CAMPESINOS DE MÉXICO, EU Y CANADÁ



FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC

Representantes campesinos de México, Canadá y Estados Unidos convinieron en realizar acciones solidarias trinacionales para evidenciar su unión y solidaridad ante la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y para impulsar condiciones nuevas que reviertan lo que hasta ahora ha ocurrido en el marco de este tratado (caída del ingreso de los productores de los tres países, disolución o debilitamiento de sus organizaciones económicas, traslado del control de las operaciones en el agro hacia las grandes transnacionales y pérdida de mercados locales, entre otras cosas).

En una reunión sectorial previa al Encuentro de Organizaciones Sociales Canadá, Estados Unidos, México. Por Nuevas Formas de Cooperación Internacional, realizado en la Ciudad de México el 26 y 27 de mayo, representantes como José Bernardino Magdaleno Velasco, presidente de la Unión Campesina Totikes (UCT) de Venustiano Carranza, Chiapas, y Pedro Torres, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) y miembro del Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh), expresaron preocupaciones por los efectos acumulados de 23 años del TLCAN en el campo mexicano.

Víctor Suárez, director ejecutivo de ANEC, por su parte, advirtió que la renegociación del TLCAN en manos de los gobiernos implica el gran riesgo de que se incorpore al libre comercio servicios tales como la educación, la salud, el abasto de agua y el saneamiento, así como derechos de propiedad intelectual, por ejemplo los de las semillas. Es importante impedir

esto, y también hacer un frente común campesino de los tres países “para evitar que nos confronten entre pueblos, pues lo que quiere la sociedad en los tres países es integración, pero de otro tipo y con otros objetivos para sustituir el actual modelo fallido, con soberanía, con protección del medio ambiente, con la democracia que hemos perdido al tiempo que se fortalecen las corporaciones, y queremos un diálogo público e incluyente”.

Pedro Torres afirmó que los pequeños y medianos productores del campo, e incluso los grandes, estuvieron excluidos de las negociaciones del TLCAN hace más de 23 años, “porque no estábamos considerados en este proyecto [...] fuimos objeto de la negociación no sujetos, y el tiempo se ha encargado de comprobar esto. Resentimos muchos estragos. Hay unos cinco millones de campesinos mexicanos emigrados en Estados Unidos. La pobreza rural se ha profundizado y hay desolación en muchas regiones campesinas del país”.

En Chihuahua de los diez mil productores de manzana que había ya sólo sobreviven dos mil o tres mil, dijo, pues el modelo de comercio que tenemos genera precios castigados a los productores, y si éstos quieren sobrevivir, tienen que afrontar los costos de producción aunque los rebasen, y si no, pues pueden emigrar a Estados Unidos o pueden empobrecerse o pueden involucrarse en el narco; al sistema no le importa, ya que sólo defiende a las grandes corporaciones, y así se observa en las reglas del TLCAN. “Con mucha facilidad, estas empresas se apoderan de la materia prima que nosotros generamos, y hacen negocio, y el gobierno no tiene ningún interés por apoyar a los productores”.

Y al arrasar a la pequeña agricultura, tampoco los consumidores han salido beneficiados, afirmó; los supermercados y sus productos industrializados han hecho desaparecer muchos negocios pequeños y han desvalorizado los alimentos campesinos. Hasta antes de los años 80's, cuando México entró de lleno al esquema neoliberal, los productores podían comercializar sus productos por medio de misceláneas o pequeñas tiendas; allí colocaban huevo, leche, frutas, y el consumidor podía comprar a precios accesibles. Eso ya no ocurre.

El representante de Totikes comentó: “El gobierno dice que el maíz no es importante, quiere que ya no hagamos milpa, que nos vayamos a Estados Unidos, a las ciudades”. El modelo del TLCAN ha apostado por la competitividad, favoreciendo con subsidios sólo a

los productores de tipo comercial, y ha inducido a la sustitución de granos por otros cultivos de exportación. “Pero nosotros somos hijos del maíz y no vamos a permitir que muera el maíz nativo, no queremos maíces transgénicos ni de bolsa. Somos gente trabajadora y queremos cuidar a la madre tierra. Y hacemos esto por nosotros pero sobre todo por nuestros hijos y nietos”.

Karen Hansen-Kuhn, directora de Comercio y Gobernanza Global del Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), de Estados Unidos, afirmó que los vaivenes de precios y el *dumping* de EU hacia otros mercados han propiciado que los productores produzcan más y más, en una dinámica falta de lógica, pues ello induce a una caída de sus ingresos, a tal grado que hoy son 50 por ciento inferiores en comparación con tres años atrás, y las corporaciones han tomado ventaja moviendo a través de las fronteras sus operaciones a fin de lograr las mayores ganancias. “Hay ciertas coincidencias con lo que vemos en México. Hay tantas historias terribles en el campo de nuestro país que van de la mano de políticas comerciales... Debemos decir lo que queremos de forma trinacional. En EU el agronegocio no quiere cambios, pero lo productores sí. Debemos ser capaces de contar la historia como la hemos visto”.

Jesús Emiliano Loyo, del FDCCH, afirmó que un nuevo TLCAN donde sean consultados los campesinos, podría generar ajustes en los mercados con efectos positivos para los consumidores y las economías nacionales y locales. Por ejemplo, dijo, en Chihuahua se produce algo-

dón transgénico; podría buscarse una reconversión a maíz y con ello México reduciría su dependencia de unos diez o 12 millones de toneladas en un millón. “Hay 800 mil toneladas de nuez que se producen y va todo a la exportación, y para ello se utiliza agua fósil de cientos de pozos. Es agua que tardó muchos años para conjuntarse. No habría inconveniente tampoco que allí se sembrara maíz, unos dos millones de toneladas, en lugar de tener esos árboles de nuez”.

Jan Slomp, presidente de la National Farmers Union (NFU) de Canadá, lamentó que en su país las cooperativas agrícolas prácticamente han desaparecido, con excepción de las de Quebec. Las transnacionales se han apropiado de los negocios; los productores antes movían sus granos por medio de sus propios elevadores y el tren, y ahora los deben trasladar a lo largo de grandes distancias para llevarlos a las terminales de las transnacionales, de tal forma que 50 por ciento de las utilidades generadas por los granos van a parar a manos de esas corporaciones.

El supuesto interés del TLCAN es mejorar las condiciones de vida de la población, pero lo que en realidad ha ocurrido es favorecer el movimiento del capital a costa del bienestar social, destruyendo, en el caso del agro, cooperativas y protecciones legales, mercados justos y la producción de ciertos alimentos. “Hoy queremos crear una nueva plataforma, con condiciones económicas y sociales que deben ser redefinidas y que todo el capital esté sujeto a esas condiciones, incluyendo las de tipo ambiental”, dijo (LER). 7



FOTO: Edgardo Mendoza / ANEC

EL TLCAN: ¿HACIA UN CAMBIO AGRÍCOLA, O MÁS DE LO MISMO?

Jorge Witker Velásquez Director del Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior, Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid

A mediados de mayo se dio inicio formalmente al proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en Estados Unidos (EU), por medio de un escrito del Ejecutivo al Congreso de ese país, que expresa el objetivo de modernizar y actualizar las disciplinas trilaterales que por 23 años han regido el comercio regional en Canadá, México y la Unión Americana.

Con ello, se inicia una ruta crítica y se observa que, de acuerdo con los plazos de la legislación vigente en el vecino país, la negociación entrará de lleno al escenario electoral, tanto en México como en EU.

Por el lado de México, poco se ha dicho respecto de las consultas que se harán a la sociedad civil (empresarios, organizaciones sociales, sindicatos, académicos, etcétera), a fin de evaluar con objetividad los saldos positivos y negativos que esta experiencia integracionista ha deparado al país.

Los temas que se incorporan a esta renegociación o modernización son, en general, temas propuestos por Estados Unidos, y que bien podrían ser comparados con lo negociado con anterioridad en el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), pues antes de su cancelación formal por el actual gobierno estadounidense se afirmó que este instrumento de Asia-Pacífico era el mecanismo que actualizaba y modernizaba al TLCAN, colocándolo a la altura de un instrumento prácticamente de “cuarta generación”, en el ámbito del comercio internacional contemporáneo.

Sería interesante conocer la agenda mexicana de renegociación, para someter a la discusión trilateral puntos que pertenecen al interés nacional de los mexicanos.

Una breve enumeración al respecto nos debiera orientar a temas como el *dumping* social, las diferencias salariales abismantes, el libre tránsito de trabajadores y profesionales en la región, los subsidios agrícolas y la mejora de los mecanismos de solución de controversias, especialmente en materia de transporte terrestre e inversiones al respecto.

Un tema complejo de interés para México, no cabe duda, es la producción y la comercialización de los productos agrícolas, especialmente granos, en donde las asimetrías, junto a las promesas incumplidas de hace 23 años, siguen vigentes, incluso como un

instrumento de negociación, pues mejorando los niveles de vida de los campesinos mexicanos se estaría autorregulando la corriente migratoria anual, que tan negativos efectos ha tenido tanto para la frontera norte mexicana como para las familias de residentes en el vecino país.

En efecto, desde la perspectiva mexicana, sería interesante poner el acento en el papel de la agricultura en la región, pues la argumentación oficial que el TLC constituye un instrumento de beneficios para todos (se habla de una negociación consistente en “ganar-ganar” para México, Estados Unidos y Canadá), afirmación ésta que no merece análisis alguno, pues desde los fenicios el comercio históricamente ha sido el escenario en que unos ganan y otros pierden, cuestión que, pese al gran avance de las innovaciones tecnológicas, no ha sido superada.

Al parecer el campo mexicano ha sido el sector más perjudicado en la forma cómo se han cumplido las distintas etapas de cumplimiento del TLCAN. Por ello, como un aporte a la agenda mexicana, nos permitimos reflexionar con algunos datos al respecto:

Es necesario recordar que el tratamiento gradual que se le otorgó en teoría al sector agrícola no fue cumplido por las autoridades mexicanas de la etapa de desgravación del Tratado. En el caso de los cupos de importación, se fijó un cronograma por el cual se irían aumentando en pequeños porcentajes anualmente, a fin de ir impulsando la competitividad nacional y permitir que el campo fuera entrando al escenario del libre mercado sin exabruptos ni sobresaltos.

La liberación de estos cupos en granos y cárnicos, y el verdadero subsidio y estímulo fiscal que se otorgó a las importaciones agrícolas, impactaron de tal manera el mercado interno que, en pocos años, la estrategia complementaria de los cupos se transformó en una política de fomento a las importaciones indiscriminadas, operaciones realizadas fundamentalmente por los grandes consorcios de alimentos que, desde entonces, controlan la dieta de los mexicanos.

Como ejemplo, mencionamos los cupos de arroz, que cubrían sólo 15 por ciento del consumo aparente del grano, mientras el 85 por ciento era abastecido por los arroceros de Tabasco y otras entidades federativas; hoy, a 23



Jorge Witker Velásquez

FOTO: Gaceta UNAM

años de TLCAN, México importa casi 90 por ciento del arroz que se consume, mientras la producción nacional abastece el diez por ciento restante. Igual suerte corrieron el maíz, el trigo, los cárnicos, la leche, con efectos devastadores en el campo mexicano. He aquí unos datos: importamos 65 por ciento del trigo que consumimos, 40 por ciento de la carne de cerdo, 16 por ciento de la carne de ave y cerca de 20 por ciento de la leche, según datos del IV Informe de Gobierno 2015-2016.

A consecuencia de lo anterior, miles de productores agrícolas perdieron sus fuentes de empleo, bajando la participación de la agricultura en el empleo de 26 por ciento a menos del 18.

A lo anterior, y como efecto de las importaciones no graduales, 40 por ciento de los campesinos viven en pobreza extrema, y de los casi 50 millones de pobres (reconocidos por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Inegi), 30 millones son habitantes de las zonas rurales, debido a que la competencia desleal de los consorcios agroalimenticios extranjeros (Cargill, Monsanto, Dupont y otros) que operan con subsidios otorgados no sólo por la Oficina del Tesoro de nuestro vecino del Norte, sino también –paradójicamente– con subsidios del propio gobierno de México.

Corolario de lo anterior, y como parte de la agenda agrícola mexicana a renegociar en el TLCAN, está el sistema de producción agrícola por contrato, que realiza una instancia de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), denominada Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de

Mercados Agropecuarios (Aserca), y que cumple funciones oligopólicas, pues los beneficiarios son cuatro empresas controladoras del mercado de granos (Bimbo, Maseca, Gruma y Cargill). Esos consorcios, junto a empresas de seguro agrícola, proyectan precios de futuro a favor de supuestos productores, a los cuales Aserca les otorga el 75 por ciento del seguro respectivo, mientras cada productor debe cubrir el 25 por ciento restante. Para cubrir ese 25 por ciento, los supuestos productores endosan su derecho a las grandes empresas mencionadas, que facilitan la operación, y se hacen dueños de todas las alzas de precios que generalmente tienen los *commodities* en la Bolsa de Chicago. Con esto, tenemos un esquema aberrante: de cada centavo que supuestamente cubren dichos oligopolios, tienen 17 centavos de ganancia, de lucro absoluto, sin que los productores obtengan beneficio alguno de las alzas de precios de futuro de los granos.

Este esquema debe estar en la mesa de negociaciones, a fin de restablecer efectivamente la libre competencia y la tan mentada economía de mercado, factores éstos que fueron en su momento esgrimidos como los nuevos pilares de un campo mexicano que pasaba de la dependencia de una Conasupo ineficiente y corrupta a escenarios de primer mundo.

Para medir un aproximado de las ganancias que obtienen con el sistema de subsidios de Aserca, y la diferencia de los centavos antes mencionada, podemos decir que, en el caso del maíz, se importan 12.1 millones de toneladas de grano amarillo y cerca de 21 millones de toneladas de maíz blanco.

Conviene destacar que, desde el discurso oficial, según la Sagarpa, México se encuentra en el mejor de los mundos, pues es el exportador número 13 de alimentos a escala mundial; incluso, se afirma que entre 1993 y 2012 el comercio entre México y Estados Unidos creció en 452 por ciento, con un intercambio cercano a los 35 mil millones de dólares, con rubros alimenticios recíprocos. Tales cifras son un espejismo, pues nada aclaran los miles de millones de dólares en las importaciones anuales de granos, que no se pueden comparar con exportaciones de tunas, tomates, nopal, guayabas, dátiles, limón y papaya, a los que habría que agregar aguacate y cervezas. Es decir, es imposible comparar maíz, trigo, arroz, sorgo y soya, insumos básicos de la alimentación de los mexicanos, con los tropicales o semitropicales productos mencionados, que no figuran en la dieta de las familias mexicanas promedio actuales.

Como vimos, el espejismo de Sagarpa y de otros voceros de la indefensible actividad exportadora nacional se viene abajo ante las las ingentes importaciones de alimentos. Según el Inegi, el 50 por ciento de la comida actual de los mexicanos es de origen extranjero, lejos de los campos nacionales.

Así, se puede observar que la agenda de México, en función del interés nacional, es una asignatura pendiente que debemos empezar a preparar para que los encargados de la modernización o actualización del TLCAN no vayan a deslizarse por la tan poco feliz frase cotidiana de nuestros hermanos: que el TLCAN no vaya a ser “más de lo mismo”. 🍌

CONSECUENCIAS DEL TLCAN

Carlos Manuel Castaños

La actual crisis alimentaria y nuestra falta de competitividad en aspectos agropecuarios y forestales no es casual, ni atribuible a catástrofes derivadas de incontables fuerzas de la naturaleza; es resultado de políticas impuestas por parte de organismos transnacionales como el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio (OMC), que han influido en las políticas agrícolas de los países en desarrollo. En el caso de México, la orientación ha sido hacia la dependencia alimenticia, la dependencia tecnológica, la destrucción de los recursos naturales y la desigualdad y pobreza de la población.

Desde antes que se aprobara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno mexicano ya había desmantelado la estructura de la investigación agrícola y los procesos de asistencia técnica y comercialización, abriéndose espacios al capital privado.

Desaparecieron dependencias y servicios importantes para los pequeños productores. Entre ellos, el servicio de extensionismo; la Productora Nacional de Semillas (Pronase), Guanos y Fertilizantes de México, el Banco de Crédito Rural (Banrural) y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). Y se redujeron los apoyos al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y los subsidios a los alimentos básicos del pueblo mexicano.

Y el TLCAN generó otro grupo de perdedores: las pequeñas y medianas empresas que formaban parte de la base industrial del país, y las microempresas, que no tuvieron acceso al crédito o a los mercados globales.

Era una realidad, el país era más desigual.

En la práctica, en la agricultura nacional ocurrió: pérdida de la soberanía en la producción de granos básicos, en particular del maíz, el alimento del pueblo mexicano; balanza comercial deficitaria; desplazamiento de la agricultura tradicional; entrega de recursos estratégicos a empresas estadounidenses y españolas; incremento del extractivismo minero en manos de empresas de Canadá, China e Inglaterra; destrucción de las empresas del Estado y llegada de otras de carácter transnacional; destrucción de la biodiversidad; debilitamiento del mercado interno en sujeción a las políticas de la OMC; desmedido incremento de la migración; crecimiento permanente de la po-

breza (Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Puebla); pérdida de dos millones de empleos rurales, y feminización de la agricultura.

En específico, en la agricultura de los pequeños productores: quiebra de las unidades productivas, estancamiento productivo, destecnificación de los sistemas de producción, rendimientos estancados, falta de recursos productivos, pérdida de semillas criollas, desaparición de tecnologías campesinas, discriminación marcada de lo urbano hacia lo rural, depresión de los salarios para las labores del campo, control a la baja de los precios de productos campesinos y disminución de los presupuestos orientados al medio rural.

Todo ello, en el marco de la tesis defendida por el gobierno de “que era más barato importar alimentos que producirlos”.

El gobierno alineó sus políticas económicas a las de sus socios, particularmente de Estados Unidos (EU).

A los pequeños productores los empobrecieron y los pusieron a competir en condiciones desventajosas con sus pares de Canadá y EU.

La pobreza existía en el campo mexicano pero nunca en las dimensiones actuales. El gobierno federal es el responsable por no atender los problemas de los pobres del sector rural y alinearse a las políticas de la economía mundial; prefirió someterse a las disposiciones de la economía que fijaban los poderosos y no defender a sus compatriotas más necesitados.

Un ejemplo de la debacle del campo es el maíz. En el TLCAN el rubro más amenazado era el de los productores dedicados al maíz. En contraste con los de hortalizas y frutales, estaban en franca inferioridad, no tenían ventajas derivadas del clima, la fertilidad, los sistemas de producción y/o los rendimientos por superficie cultivada. Se producía en pequeñas superficies, básicamente en siembras de temporal, y concentraba el 30 por ciento de los seis millones de trabajadores rurales.

Su mayor importancia se derivaba del hecho de que además de ser un alimento básico en la dieta nacional, era responsable de la ocupación directa de tres millones de productores, y hasta 18 millones de personas dependían del cultivo para su alimentación. Por aquella época de las negociaciones, se cosechaban 18 millones de toneladas de maíz en nuestro país, contra 200 millones en EU. La importación del maíz rebasaba el porcentaje (respecto del consumo) recomendado por la Organización



FOTO: Enrique Pérez S./ ANEC



de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que era 25. Las importaciones en nuestro país fluctuaban alrededor de 45 por ciento.

Otro ejemplo está en la dependencia tecnológica. Se permitió al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) establecer el Masagro, un programa de asistencia técnica impuesto desde el exterior, en detrimento de acciones similares de instancias encargadas de ejercer esa responsabilidad. Se buscaba generar capacidades en los pequeños productores de maíz y trigo para elevar los rendimientos de los cultivos. La meta era alcanzar una producción de maíz de entre cinco y nueve millones de toneladas en condiciones de temporal en un plazo de diez años. En la inauguración de Masagro, el ex presidente Felipe Calderón declaró: “el

próximo año se reducirán las importaciones de maíz en un 50 por ciento”. Como era de esperarse, tal promesa resultó una gran mentira; no se alcanzó lo prometido.

El CIMMYT sigue caminando por el campo mexicano, robando las tecnologías campesinas para ponerlas a disposición de las voraces transnacionales de la agricultura.

En el mundo se manejaba un sistema alimentario llamado la agricultura de tipo industrial, que tenía y tiene consecuencias dañinas sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Este sistema se basa en la explotación del monocultivo en grandes extensiones de terreno, utiliza una tecnología altamente mecanizada y a menudo emplea semillas transgénicas y elevadas cantidades de fertilizantes químicos y pesticidas. Se presenta como

la agricultura “científica”, frente a la agricultura tradicional de producción de alimentos.

Este tipo de agricultura ha logrado imponerse, pese a sus negativos impactos, utilizando un concepto: la agricultura industrial es capaz de producir más alimentos para dar de comer a la creciente población mundial.

Pero esa afirmación es falsa. En la actualidad en el mundo hay casi mil millones de personas que padecen hambre, además de que el sistema agroalimentario aporta hasta 50 por ciento de las emisiones contaminantes que provocan el cambio climático debido al uso intensivo de los agroquímicos, reduce la biodiversidad, emplea semillas modificadas, fertilizantes y plaguicidas químicos y agota los nutrientes del suelo.

En las transformaciones del campo y en la vida de la población campesina, es importante mencionar el papel que tuvo la reforma al artículo 27 constitucional, ocurrida en 1992, previo a la entrada en vigor del TLCAN.

Los cambios que se originaron de la modificación de este artículo fueron determinantes en la vida de los pobres del campo.

Se promovió la asociación de los campesinos con el Estado y terceras personas, se permitió que la tierra ejidal fuese vendida, rentada y/o explotada, y posteriormente (2001), se negó el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el control de su territorio.

El modelo neoliberal se caracterizó por el privilegio del crecimiento industrial y urbano a costa del desarrollo del campo. El capitalismo comercial produjo el saqueo de los recursos naturales, los nuevos inversionistas podían explotar las tierras sin tener que comprarlas, ignorándose la realidad del entorno ecológico.

De esta manera, sin ninguna compensación, miles de familias campesinas fueron obligadas a abandonar sus tierras debido a usurpaciones por las nuevas políticas nacionales. Los resultados: destrucción de los recursos naturales, suelos erosionados, cambio de uso del suelo, aprovechamiento irracional de los recursos naturales y desequilibrio de los ecosistemas.

La minería, los proyectos carreteros los desarrollos de la energía eólica y las explotaciones petroleras (con su nefasto *fracking*) han cambiado la cara del campo mexicano y han sumido en más pobreza a millones de campesinos, destruyendo su entorno natural y el patrimonio nacional. ➔

→ El TLCAN entró en vigor durante el salinismo, en 1994, y se alentaron las exportaciones agrícolas de hortalizas y frutas. Las agroexportaciones beneficiaron a empresas y agricultores con capacidad para producir alimentos a nivel industrial, pero al mismo tiempo se siguió importando casi la mitad de los alimentos que consumimos, a un costo cada vez más elevado debido al alza del precio del dólar.

Las contradicciones del modelo provocaron que existieran un pequeño grupo de productores con capacidad para exportar, muchos de ellos al servicio de firmas extranjeras, principalmente estadounidenses, que son las que se quedan con las mayores ganancias de las ventas de productos agrícolas exportables, ejemplos el aguacate en Michoacán y las frutillas en Jalisco.

Para contrarrestar los efectos negativos del Tratado para los productores de bajos ingresos, se escucharon voces que pedían la realización de programas específicos para beneficiar a ese tipo de productores, pero poco o nada se logró.

Varios factores se conjugaron para no darle la debida importancia a la petición. Uno de ellos tenía que ver con las ventajas que el Tratado ofrecía a otros sectores de la economía. Un aspecto relevante estuvo en los diferentes criterios para juzgar el programa rural por parte de los negociadores que se escogieron para defender los intereses de México. Era gente de extracción urbana, con altos grados académicos en Economía, pero incapaces para comprometerse con los problemas del campo mexicano, sobre todo los de los campesinos pobres; no los consideraban importantes.

La gente de la ciudad ve con ojos indiferentes a la población del campo y sus problemas; hay una marcada actitud discriminatoria. Los pobres no cuentan, sus angustias carecen de importancia.

Los pobres rurales con raíces indígenas tienen un sistema de vida muy propio, una manera de interpretar al mundo, creencias, valores y conocimientos que articulan su vida social, una cosmovisión que choca con la formación de la gente de las ciudades.

Para agravar los problemas campesinos, en la actual negociación se ha nombrado casi al mismo grupo de economistas que estuvo en la primera, y el actual secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ha declarado recientemente su preferencia a que las necesidades alimentarias de los mexicanos se cubran con importaciones, lo que nos da cuenta de la poca importancia que en el gobierno se le da a la agricultura y a nuestra soberanía alimentaria. 🍌

TRUMP: CONTRADICCIONES Y CRISIS DE LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL*

Alberto Arroyo Picard Universidad Autónoma Metropolitana alberto.arroyo60@gmail.com



Alberto Arroyo Picard, al centro en la primera fila

Ante la coyuntura actual en la relación de los tres países de América del Norte, y los intentos gubernamentales para “modernizar” el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), algunos retos que enfrentan los movimientos sociales son:

- Retomar la iniciativa para buscar una salida benéfica para los pueblos a la crisis de la globalización.
- No podemos caer en la disyuntiva de globalización salvaje o proteccionismo.
- No podemos caer en la trampa de que hay que salvar el TLCAN ya que supuestamente la ruptura llevaría a una crisis sin precedentes.

Aprovechemos la crisis de la globalización para un cambio de fondo en beneficio de los pueblos, en que la competencia no se base en bajos salarios y condiciones laborales, así como en la relajación de las regulaciones ambientales.

El reto no sólo es la lucha por la desaparición del TLCAN y sustituirlo por un acuerdo distinto de complementación económica, sustentabilidad social y ambiental, respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Si no logramos una fuerza social mucho mayor en cada uno de nuestros países y en nuestra región, hay un escenario aún peor que el TLCAN: la desaparición formal de un acuerdo trilateral e imposición unilateral de sus contenidos por la vía de la fuerza económica y política de Estados Unidos sobre México. Es decir, concesiones unilaterales de nuestro gobierno, sin obligaciones para el gigante del norte.

Estamos en una nueva etapa del capitalismo.

Lo nuevo de la etapa actual del capitalismo es la globalización de la producción, ya no sólo del comercio y la inversión. Estamos en una etapa de fábricas globales dispersas por el mundo, lo cual lleva a buscar libre circulación de mercancías y capitales, y necesita una gobernanza global de la economía de la que forman parte esta especie de constitución mundial de los derechos del capital que son los tratados de libre comercio (TLCs) y los acuerdos en materia de inversiones y de servicios.

Asimismo, hay una formación profunda de los Estados. Recordemos que el papel estructural del Estado es garantizar la reproducción del sistema, pero ahora a los Estados nacionales se les exige jugar un papel que garantice la reproducción del sistema global aun a costa del desarrollo de sus países.

Pero esta globalización está en crisis. En el ámbito económico la crisis se expresa en el empobrecimiento de la población. La revolución tecnológica, incluida la automatización y robotización de la producción disminuye la capacidad de generar empleos, lo que aumenta el empobrecimiento de gran parte de la población y con ello crece la dificultad de encontrar mercado a la producción aumentada. Es decir se agudiza lo que Marx llamó el salto mortal de convertir de nuevo la mercancía a dinero.

Ello lleva a que muchas inversiones se refugien en la especulación financiera. Resulta más negocio especular que producir. Pero esto concentra la riqueza, no produce nueva riqueza, y cuando revienta la burbuja espe-

culativa, lleva a crisis como la de 2009, que pueden ser cada vez más frecuentes.

Otro sector de refugio es la sobreexplotación depredadora de recursos naturales que junto con otros factores ha llevado a la aceleración del cambio climático. La globalización también conlleva un excesivo movimiento de insumos y componentes de un extremo del mundo a otro, lo que tiene un enorme impacto o huella ambiental.

Es decir, esta voracidad del capitalismo globalizado, desregulado, depredador, concentrador extremo de la riqueza está topándose con contradicciones económicas y límites ambientales.

En el ámbito político, la crisis de la globalización se manifiesta así: los Estados nacionales han descuidado su papel de garantizar las condiciones de reproducción ampliada de la economía a nivel nacional.

Esta contradicción es particularmente importante en Estados Unidos, donde el motor de su crecimiento es el mercado interno, que está disminuyendo por la precarización del empleo.

El empobrecimiento de la población y el servir primordialmente a la burguesía globalizada explican la dificultad de las elites políticas nacionales de buscar la legitimidad que les permita mantenerse en el poder.

Es increíble que los resultados del Brexit, la derrota demócrata en Estados Unidos y el crecimiento en Europa de las derechas extremas, se quieran explicar por el “atraso” de los votantes

y no como una rebelión de los damnificados de este modelo.

Por estos factores, la crisis está siendo aprovechada por las derechas en muchos países desarrollados.

¿Cuál es el significado de Trump en esta crisis?

Trump aprovechó estas contradicciones para llegar al poder, pero no representa una solución real. Ni siquiera tiene un proyecto reformista dentro de la globalización, sino que pretende profundizar la globalización salvaje: Y lo hace por medio de una mayor desregulación al sector financiero, un desprecio a las regulaciones ambientales y profundización de los tratados de libre comercio. Su discurso no corresponde con su actuación.

Trump negocia amenazando, y las elites de nuestros países han caído en esta trampa. El gobierno de México está dispuesto a dar lo que sea para mantener el TLCAN y con ello el negocio de su burguesía globalizada y de la elite política corrupta que nos ha gobernado.

La promesa del trumpismo de más empleos en Estados Unidos es un engaño, ya que si acaso logra (lo que es poco probable) que regresen fábricas al territorio estadounidense vía la baja de impuestos a las ganancias. Ello se compensará vía mayor robotización, es decir, menos empleos.

Además, ni siquiera ha prometido mejores salarios y pudiera usar la precarización del empleo estadounidense como otro incentivo para re-localizar en Estados Unidos empresas que se fueron.

Un escenario catastrófico, pero no totalmente descartable dado lo autoritario de Trump, pudiera ser que la política anti-migrante pudiera conjugarse con una menor protección al desempleo que obligue a los estadounidenses a aceptar trabajos hoy inaceptables.

Es decir que Trump representa el enfrentamiento autoritario a las dificultades de la actual globalización, incluso es una expresión de lo que se ha llamado una acumulación militarizada. Recordemos que el rubro que más aumenta en la nueva propuesta de presupuestos son los gastos militares.

NI TLCAN, Ni caos, sí hay opciones. 🍌

* Ponencia presentada durante el Encuentro de Organizaciones Sociales Canadá, Estados Unidos, México. Por Nuevas Formas de Cooperación Internacional (26 y 27 de mayo).

MALA NOTICIA EL ACUERDO AZUCARERO; REVELA DEBILIDAD DE GOBIERNO PEÑISTA ANTE RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN

Estados Unidos (EU) y México anunciaron este 5 de junio un nuevo acuerdo azucarero preliminar que recorta las posibilidades de nuestro país para exportar azúcar refinada al vecino del norte. El convenio fue interpretado por conocedores del sector agroalimentario como una mala señal en miras a las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pues beneficia a las grandes corporaciones (las empresas refresqueras y los poderosos productores y refinadores de azúcar de Estados Unidos) y a nadie más, esto es, mantiene la tónica que ya expresaba el TLCAN, y evidencia vulnerabilidad en el gobierno mexicano.

El acuerdo azucarero, signado por el secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, y el de Economía de México, Ildelfonso Guajardo –y que aún espera “en cuestión de días” el visto bueno de los azucareros de EU “para tener una confirmación plena”, según Ross–, es una especie de refrendo del acuerdo de suspensión de medidas *anti-dumping* que estuvo en vigor entre octubre de 2014 y junio de 2016, pero ahora con más desventaja para México (para nuestra agroindustria azucarera), pues recorta las posibilidades de envíos del producto refinado, esto es con valor agregado.

Es importante recordar que cuando el TLCAN entró en vigor en 1994 el azúcar recibió un tratamiento especial –en medio de polémica y roces y definido por “cartas paralelas” al TLCAN muy cuestionadas– que impidió el acceso libre del producto de México a EU durante 14 años. A partir de 2008 se eliminaron esas trabas y nuestra azúcar logró entrar sin restricciones arancelarias a EU, en volúmenes de alrededor de un millón de toneladas (de los más de 6 millones de producción nacional).

Al mismo tiempo, se abrió el mercado mexicano a la fructosa estadounidense. Sin embargo, en 2013, dada una excelente zafra en nuestro país, las exportaciones de azúcar a EU se dispararon a más de dos millones de toneladas y en 2014 la industria de EU acusó a México de incurrir en *dumping* al exportar el endulzante a un precio más barato de lo que se vende en el mercado local.

Ello motivó que en agosto de ese año el Departamento de Comercio de EU determinara de manera preliminar aranceles de 2.99 a 17.01 por ciento para la importación del azúcar de México.

Ambos gobiernos entraron en negociación entonces y se acordó un convenio de suspensión de aranceles *anti-dumping*, que inició en octubre de 2014. Este acuerdo limitó la cantidad de azúcar que podía enviar México a EU y estableció que la refinada representaría 53% del total. Para 2016 México exportó 1.1 millones de toneladas.

La industria azucarera volvió a quejarse del *dumping* mexicano, y eso motivó el cese del acuerdo bilateral de 2014.

El acuerdo recién negociado mantiene los volúmenes permitidos de exportación azucarera de México a EU, pero determina que la refinada sólo puede representar 30 por ciento del total de esa exportación; el 70 por ciento debe ser azúcar cruda, a efecto de que la refinación (el valor agregado) sea realizada por refinadoras en territorio de EU.

Al término de la negociación, Ildelfonso Guajardo destacó que el acuerdo implica que si Estados Unidos requiere en cierto momento más azúcar para su mercado interno, deberá dar prioridad a México en el abasto, y solamente podrá abrir cupos a terceros países en caso de que México no esté en condición de satisfacer la demanda.

En una entrevista dada a *La Jornada*, Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC), subrayó que al aceptar un recorte en el porcentaje de azúcar refinada que se exporta a EU, las autoridades de nuestro país abrieron la puerta a nuevas presiones del mismo tipo en el futuro (10 de junio, Sección Sociedad de *La Jornada*, texto de Fernando Camacho, <http://www.jornada.unam.mx/2017/06/10/sociedad/033n1soc>).

“Augura malas noticias para el sector agropecuario mexicano, porque tenemos el grave riesgo de que nos impongan cuotas, calendario, calidad y precios de exportación en otros productos, como el aguacate, el jitomate, las *berries*, la cerveza, el tequila y el café, o cualquier otro que a juicio de Washington le cause problemas en su balanza comercial”, señaló el diario citando a Suárez. Esto en vísperas de renegociaciones del TLCAN previstas para iniciar en agosto próximo.

“Estamos en el peor de los mundos, porque nos imponen res-



Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos

tricciones a la exportación de productos agropecuarios, y por otro lado nos imponen la obligación de aceptar exportaciones *dumping* [...]”, dijo Suárez en referencia a las denuncias que productores cañeros han hecho de que la fructosa de jarabe de maíz proveniente de Estados Unidos incurre en *dumping*, pues se exporta a México en 454.43 dólares por tonelada, en contraste con los 900 dólares por tonelada que es el precio en el mercado interno de EU.

La fructosa es un producto competidor directo del azúcar en varias manufacturas, como refrescos, pasteles y dulces. Y México consume 1.6 millones de toneladas de fructosa al año, sobre todo vía la industria refresquera. Así, Enrique Bojórquez, presidente de Sucroliq, empresa mexicana que refina azúcar líquida, afirmó al sitio especializado *EconomíaHoy* que los beneficiarios de este acuerdo serán las refresqueras trasnacionales Coca-Cola y Pepsi Cola establecidas en México, ya

que son las grandes importadoras de fructosa.

“Creo que la Secretaría de Economía trabaja más en defender los intereses de esas dos empresas que en los intereses de la gente que vive en el campo. Se debería actuar frenando el *dumping* de fructosa en México, lo cual no se hizo porque no existe la voluntad”, dijo, según citó el portal *SinEmbargo.mx* (7 de junio, texto de Dulce Olvera, <http://www.sinembargo.mx/07-06-2017/3235179>) (LER). 🗣️



Ildelfonso Guajardo, secretario de Economía de México

EL NUEVO TLC: ¿QUÉ SERÁ DE LOS DERECHOS DIGITALES?

Gisela Pérez de Acha Analista de Políticas Públicas en la organización Derechos Digitales gisela@derechosdigitales.org

Para Donald Trump, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) era “el peor tratado de libre de comercio de la historia.” Ahora quiere modernizarlo. Enrique Peña Nieto *cacarea* lo mismo sin saber qué significa. Como si la modernidad aún fuera una utopía. Como si sus premisas no hubieran causado más desigualdad, dependencia y crisis ecológicas. Después de 23 años de estar en vigor, van a renegociarlo.

Hay un patrón en las negociaciones comerciales: se hacen a oscuras, sin transparencia y privilegiando siempre los intereses de grandes corporaciones por encima de los derechos humanos. Esta vez no será diferente. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) murió cuando Trump firmó la salida de Estados Unidos. Sin embargo, su contenido sobre propiedad intelectual, comercio electrónico y tecnologías será el punto de partida para el “moderno” TLCAN. No podemos dejar que esto pase.

El capítulo de propiedad intelectual del TPP fue uno de los más discutidos gracias a que Wikileaks lo filtró. De lo contrario, hubiera permanecido en secreto hasta su firma. Una de las primeras cosas que proponía era aumentar el plazo de los derechos de autor para protegerse durante la vida de los creadores y hasta 70 años después de su muerte. Esto fomenta la idea de que la cultura y el conocimiento son propiedad privada y se pone a disposición únicamente de quienes pueden pagarla. Promueve un esquema en el que los nietos y bisnietos de los autores siguen recibiendo regalías por algo que ellos no hicieron. Nos impide descargar, leer, reproducir, copiar, pegar o *remixear* cosas que muchas veces son sabiduría popular (¡y pública!). Y en suma, es un esquema que beneficia directamente a Estados Unidos que, con industrias como Hollywood o Disney, es el principal exportador de contenidos protegidos por derechos de autor en el mundo.

El TPP también buscaba exportar una ley gringa que en la práctica ha instaurado un sistema de censura privada: la Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Básicamente se trata de un mecanismo dirigido a compañías como Google, Facebook, Twitter y Youtube bajo la siguiente lógica: si conocen de contenidos que violen derechos de autor, y no lo bajan, entonces son co-responsables por la violación. En México, Enrique Peña Nieto ha usado la DMCA para eliminar videos en los que se equivocaba diciendo que León es un estado

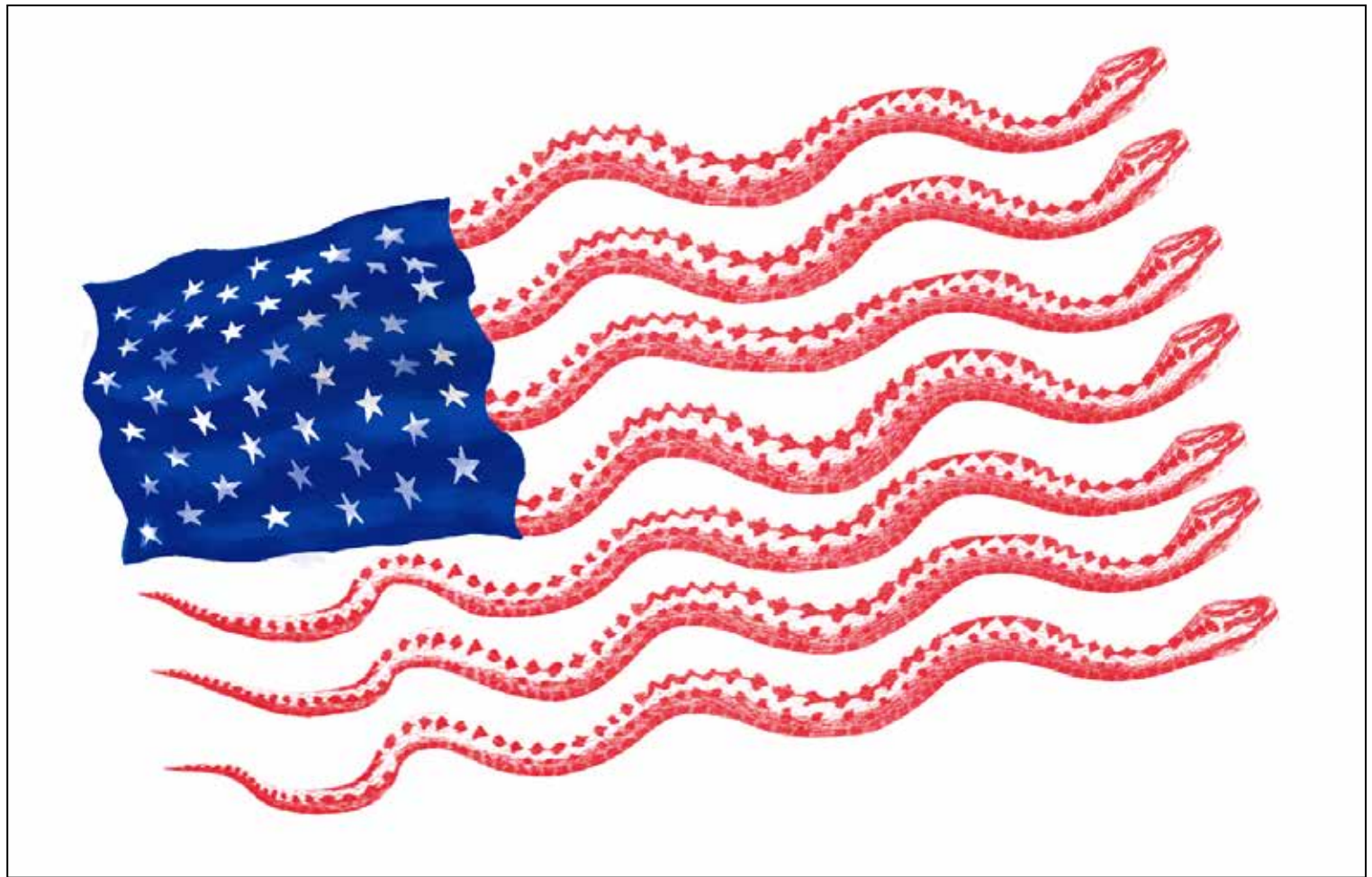


IMAGEN: Constanza Figueroa

en vez de una ciudad. Sin controles ni salvaguardas judiciales, miles de expresiones legítimas e importantes podrían ser eliminadas.

Por si fuera poco, y con esto en mente, la base del TPP era criminalizar a los usuarios y usuarias que violaran derechos de autor por bajar películas o subir videos con música protegida: cárcel, multas, pagos de procesos legales a las compañías por “afectar sus intereses comerciales”. Evidentemente se trataba de un exceso.

Sobre todo cuando un puñado de empresas –como Sony o Time Warner– detentan la mayoría de los derechos.

El capítulo sobre comercio electrónico no se quedaba muy atrás. En la era del capitalismo digital los datos son dinero y nosotros somos datos: todo lo que hacemos en internet, los sitios que visitamos, lo que consumimos y compramos. De forma inevitable, al hablar de datos hablamos de privacidad. El TPP promueve el “libre flujo de



FOTOS: Edgardo Mendoza / ANEC



datos” entre países, incluso cuando estos tratan de información sensible como salud, tarjetas de crédito o preferencias sexuales y políticas. Si estos datos terminan en Canadá no habría problema. Pero si se van a Estados Unidos tenemos un problema: Trump recientemente decretó que los extranjeros no tienen derecho a la privacidad. Hay excepciones a este libre flujo pero siempre y cuando no sean “restricciones encubiertas al comercio”. Traducción: se puede interpretar que una política que protege derechos humanos

impide el comercio de datos y por lo tanto bloquearse vía litigio.

Hay muchos otros puntos preocupantes, pero en esencia hay que decir que la modernización tiene tintes colonialistas. Estos tratados protegen a Estados Unidos y a las empresas multinacionales por encima de los intereses democráticos de personas comunes. Que quede claro: el TPP no puede revivirse. Los derechos humanos no pueden supeditarse al comercio internacional. Exijamos mejores condiciones. 🐍

¿QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE POR EL DUMPING DE MAÍZ?*

Karen Hansen-Kuhn y Sophia Murphy Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP)

El *dumping* agrícola —la práctica de exportar materias primas a precios inferiores al costo de producción— puede ser devastador para los agricultores de los países importadores, especialmente los de bajos ingresos que tienen poco poder para utilizar las normas comerciales para defender sus mercados. Es una competencia desleal para los agricultores de otros países exportadores. Y, al alentar la sobreproducción en Estados Unidos (EU), atrapa a los productores de este país en una necesidad incesante de mayores rendimientos y/o de granjas más grandes.

El maíz es emblemático de los problemas creados por el *dumping* porque es un cultivo de exportación muy importante para Estados Unidos, y porque cada vez hay más superficie aquí para la producción de maíz a pesar de los persistentes bajos precios y la importancia del maíz para la seguridad alimentaria de otros países, incluido México, la naciones de Centroamérica y África oriental y meridional. Después de décadas con niveles deprimidos, los precios del maíz aumentaron fuertemente en 2007/2008, iniciando lo que pareció ser el final de los precios bajos y el *dumping*. Sin embargo, siguió un periodo de inestabilidad, y los precios sólo volvieron a subir en 2011, antes de volver a caer, renovando el *dumping* que perjudica a los agricultores del Sur y del Norte. Con tantos perdedores, ¿por qué persiste el *dumping*?

¿Por qué es importante el *dumping*? Hay por lo menos por tres razones. En primer lugar, socava la viabilidad económica de los agricultores competidores, ya sea que éstos produzcan para sus mercados internos, o destinen sus cosechas a la exportación en competencia con la producción estadounidense. Esto es especialmente un problema para los países en desarrollo en gran parte agrícolas que dependen de la agricultura para la estabilidad económica. Ha sido objeto de controversias en curso en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), impulsadas particularmente por los gobiernos de los países en desarrollo cuyos agricultores se quejan de la inundación de importaciones baratas.

En segundo lugar, el *dumping* es una amenaza para los productores de Estados Unidos, la mayoría de los cuales venden su producto a mercados controlados por un puñado de comercializadoras de productos agrícolas (cuatro empresas controlan entre 75 y 90 por ciento del comercio mundial de cereales

2). Los precios que los agricultores obtienen por sus cultivos a menudo son menores que el costo promedio de producción. La brecha disminuyó e incluso desapareció brevemente en 2007/08. Pero los precios han caído nuevamente, al nivel más bajo desde 2006. El ingreso agrícola neto en Estados Unidos ha bajado un 50 por ciento desde 2013.

Los agricultores estadounidenses dependen de los ingresos no agrícolas y de los pagos del gobierno para mantenerse en los negocios. Las consecuencias económicas de un sistema que refuerza el *dumping* son sentidas por los productores estadounidenses de productos básicos y sus familias, sus trabajadores contratados y por las comunidades rurales en que viven —comunidades que están privadas de capital y que deberían apoyar una vida económica vibrante.

En tercer lugar, el *dumping* crea un entorno económico que socava la realización de los objetivos ambientales. El cuidado de la base de recursos naturales, incluyendo la salud de los suelos, la calidad del agua y la diversidad ecológica de las tierras de cultivo, se ve dañado, no sólo porque los mercados de productos básicos externalizan los costos ambientales, sino también porque las prácticas sostenibles son establecidas por una competencia cada vez más concentrada. El resultado es un círculo vicioso de políticas que perjudican a los agricultores familiares, el medio ambiente y las economías locales, tanto en Estados Unidos como en los países que reciben las exportaciones agroalimentarias de este país.

No es raro que existan discrepancias de precios a corto plazo entre los mercados nacionales y de exportación. Ningún mercado es



perfecto y los mercados de productos básicos están plagados de fallas e imperfecciones del mercado. El *dumping* es diferente; desestabiliza los mercados, es impredecible. Socava la producción agrícola nacional, la cual es una fuente importante para frenar el crecimiento de la pobreza.

Estimaciones del *dumping*. El IATP ha calculado periódicamente el grado de *dumping* de trigo, soya, maíz, arroz y algodón de Estados Unidos desde la década

de los 90's. La suposición de sentido común es que —al menos en promedio y la mayor parte del tiempo— el precio de exportación debería ser más alto que el precio de producción, para cubrir el costo de transporte y algunos beneficios para los intermediarios. El IATP utiliza la definición de *dumping* establecida en el GATT para los mercados en los que el precio de mercado puede no reflejar el “valor normal” (por ejemplo, debido a la presencia de importantes subvenciones públicas). En tales ca-

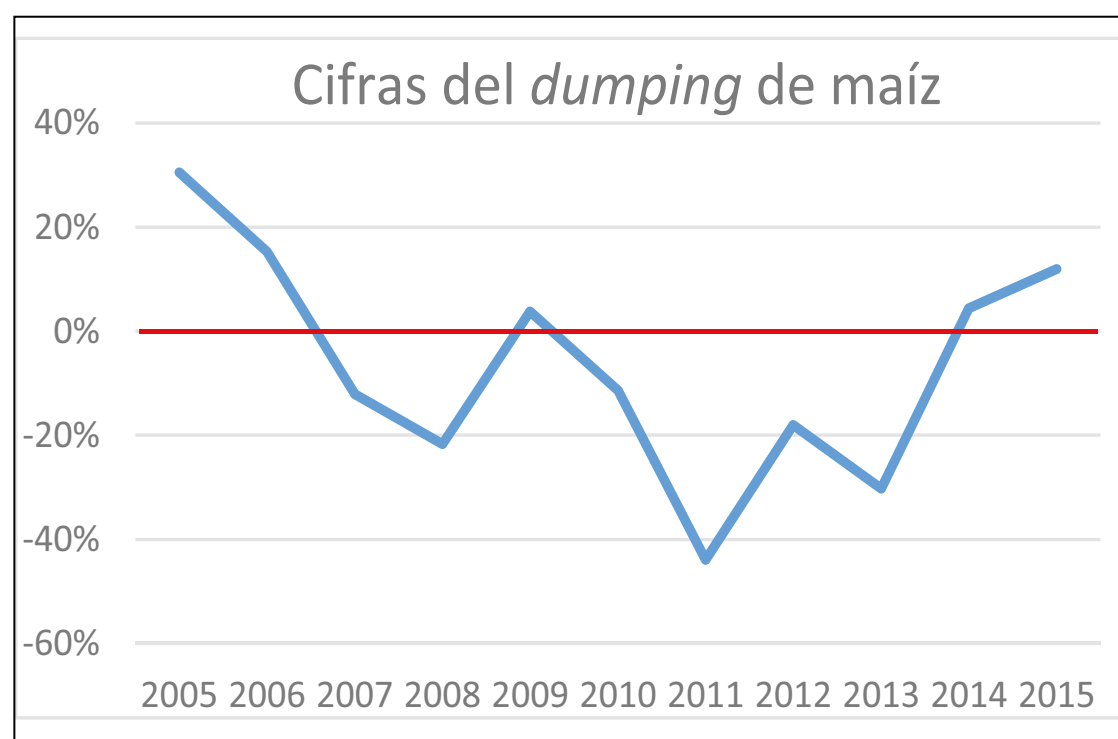
sos, el valor normal tiene que ser construido.

Utilizando datos del Departamento de Agricultura de EU (USDA) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el IATP calcula el *dumping* comparando los costos de producción y los precios de exportación, considerando cada producto por separado. En nuestros nuevos cálculos de las tasas de *dumping*, nos basamos en la misma metodología que en los análisis de 2003 y 2005, sumando los costos de producción al apoyo gubernamental asignado a esos cultivos y estimando los costos de transporte para llegar a una aproximación del costo total de producción, todo lo cual comparamos luego con los precios de exportación.

El gráfico ilustra los resultados de esas estimaciones para el maíz. A medida que los precios cayeron a raíz de la crisis de precios de los alimentos y la subida de los precios después de la sequía de 2011-12 en EU, la tasa de *dumping* de maíz aumentó, llegando a 12 por ciento en 2015. A pesar de la aparente pausa en *dumping* durante los *shocks* de precios de 2007-2008 y 2011, persiste el *dumping*. Las proyecciones actuales de sobreproducción continua de productos básicos agrícolas y precios bajos apuntan a un retorno al *dumping* en el futuro previsible.

Aunque gran parte del debate internacional sobre el *dumping* en la agricultura, en particular en la OMC, se ha centrado en el papel de los subsidios gubernamentales, la cuestión en el contexto de Estados Unidos es más compleja. No es sólo el monto de los subsidios, sino los incentivos que crean para producir ciertos cultivos que luego requieren mayores mercados, y la falta de herramientas de política para asegurar un precio justo del mercado. Ese imperativo, a su vez, impulsa la política comercial de los EU, no sólo en la OMC, sino también en otros acuerdos como el TLCAN.

¿Cómo les ha ido a los agricultores de Estados Unidos en este sistema? El hecho de que el maíz de EU pueda seguir vendiéndose a precios inferiores al costo de producción, especialmente dada la pequeña participación relativa de los subsidios en los costos totales, parece no tener sentido común. Los costos de producción del USDA incluyen costos de semillas, fertilizantes, mano de obra y otros insumos, así como la propia mano de obra (costo de oportunidad del trabajo no remunerado) y los costos implícitos de la tierra. “Recuperación de capital de maquinaria y equipo”, en la →



→ mayoría de los casos significa el reembolso de los préstamos en esas compras, o la planificación para reemplazar el equipo que desgasta. Un agricultor podría absorber algunas de esas pérdidas en el corto plazo, pero un negocio no puede sostener una pérdida perpetua. Para cubrir el déficit de ingresos, las familias campesinas son empujadas a buscar trabajo fuera de la finca. A menudo, también buscan un seguro de salud, ya que el costo de la atención de la salud es otro problema importante para los agricultores estadounidenses y sus familias.

Muchos ganan dinero con la agricultura, y los agricultores ganan algunos años. Sin embargo, los agricultores trabajan durante muchos años en condición de pérdida. La agroindustria hace dinero mucho más consistentemente. Cuando miramos el costo de producción y el movimiento a los puertos y luego la exportación, hay ganancias y pérdidas en varias etapas a lo largo de la cadena de suministro, pero gran parte de ellas están ocultas detrás de contratos y cadenas de suministro verticalmente integradas. El sistema está estructurado de una manera que permite, e incluso alienta, a los agricultores a operar con pérdidas, lo que maximiza los beneficios más allá del sector agroindustrial y deja a los consumidores, a la sociedad en general, cubriendo las pérdidas de los agricultores.

Los actuales programas de seguros de ingresos de la Ley Agrícola (*Farm Bill*) responden a descensos de precios, pero no están diseñados para resolverlos. Compensan a los agricultores en cierta medida por la catastrófica caída de los precios agrícolas, aun cuando los costos han seguido aumentando. No hacen nada para retardar o disminuir la producción. Los ingresos agrícolas han caído en picada durante los tres años recientes y el nivel de la deuda agrícola con respecto al ingreso es el más alto desde los años 80's. Dado que los pagos de estos programas se basan en promedio olímpico de cinco años (es decir, haciendo a un lado los más altos y los más bajos precios), para cada cultivo, los precios bajos continuados significan que los pagos continuarán desplomándose también. La respuesta del gobierno de Estados Unidos ha sido fomentar las exportaciones para compensar los bajos precios, pero esa respuesta no ha logrado elevar los precios y no ha resuelto la falta de poder de mercado de los agricultores.

El dumping en México en el marco del TLCAN. El maíz ocupa un lugar importante en la economía, la dieta y la cultura de México. Bajo el TLCAN, las exportaciones de maíz de EU a México aumentaron más de 400 por ciento en los primeros años del



FOTOS: Edgardo Mendoza / ANEC

Tratado y destrozaron los mercados locales. Basado en estadísticas mexicanas, Tim Wise estima que más de dos millones de mexicanos dejaron la agricultura a raíz de la inundación de importaciones del TLCAN, esto es una cuarta parte de la población agrícola. Incluso cuando las tasas de *dumping* disminuyeron durante el período de altos precios, los programas de apoyo público a la agricultura en México, al igual que en Estados Unidos, se orientaron a apoyar a los agricultores más grandes y a los intereses de los agronegocios, en lugar de favorecer a los pequeños productores, columna vertebral de la economía rural.

La integración de las cadenas de suministro bajo el TLCAN, que ha resultado tanto del acuerdo comercial como de las políticas agrícolas de cada país, ha socavado las economías rurales de ambos lados de la frontera. Las exportaciones

de maíz barato a México acompañaron la expansión de la producción ganadera en ese país. Muchos de esos animales son devueltos a la frontera para su procesamiento, con la carne resultante vendida en Estados Unidos o exportada de regreso a México a precios bajos (de forma creciente, los animales y la carne cruzan en ambas direcciones). A lo largo del camino, y a pesar del mercado ampliado, los pequeños y medianos agricultores y ganaderos han perdido poder de negociación e ingresos.

El maíz se ha convertido en una moneda de cambio en los recientes debates comerciales entre Estados Unidos y México. El gobierno mexicano ha respondido a los llamados de la administración de Donald Trump para renegociar –o abandonar– el TLCAN buscando diversificar sus fuentes de importación de maíz. Una propuesta hecha en el Senado mexicano

plantea que el gobierno deje de importar maíz de Estados Unidos y en su lugar compre de Brasil, en efecto sustituyendo importaciones de un conjunto de agronegocios por otro.

¿Quién se beneficia del *dumping*? Los beneficios de la agricultura orientada a la exportación tienden a acumularse en los actores más grandes, particularmente los agronegocios más directamente involucrados en los mercados internacionales. Mientras que las decisiones de siembra de los agricultores se realizan de manera estacional o incluso por periodos mayores, las agroindustrias se establecen para reaccionar ante los cambios en los mercados a la velocidad de la luz. Esas empresas se benefician cuando suben los precios o cuando caen, siempre y cuando prevean con éxito la dirección del cambio.

Nuevos fenómenos como el comercio de alta frecuencia impulsado por computadora han amplificado las oscilaciones de precios. Los comerciantes de granos tienen mejores estrategias de gestión de riesgos, incluyendo el acceso a los mercados mundiales y mucha más información sobre las condiciones del mercado. Los comerciantes de granos están en el negocio de agregar valor a los productos primarios, ya sea engordando animales o convirtiendo el maíz en etanol. Grano barato entonces se convierte en una entrada y las empresas están felices de que los precios internacionales de los granos se mantengan bajos. La estructura de esas cadenas de suministro, así como las normas que las gobiernan, favorecen a los agronegocios con alcance global. En los 20 años recientes, la concentración empresarial en casi todos los sectores, de insumos, y producción, transformación y distribución agrícolas, ha aumentado

sustancialmente y se ha fortalecido la consolidación vertical en las cadenas de suministro.

Conclusiones. El *dumping* puede ser devastador para los agricultores de los países importadores, especialmente los países de bajos ingresos con poco poder para defender sus mercados. También es injusto para los productores de otros países exportadores. Las causas subyacentes incluyen políticas agrícolas fallidas en Estados Unidos que fomentan activamente la sobreproducción y no limitan la concentración del mercado, así como el fracaso de las normas de la OMC para proteger a sus miembros de los efectos del *dumping*, y otros fracasos en las políticas de Estados Unidos.

La necesidad de una mejor Ley Agrícola que garantice que los agricultores reciban un pago justo, construyan una mayor resiliencia climática y proporcione a los consumidores alimentos más saludables producidos de manera más sostenible, es cada vez más evidente y urgente. El creciente enfoque en la sobreproducción y la expansión de las exportaciones nos lleva a la dirección opuesta.

El regreso al *dumping* del maíz y otros productos básicos de EU por parte de los agronegocios en un momento en que el gobierno estadounidense cuestiona los programas agrícolas de otros países (EU ha desafiado a China en la OMC y cuestiona el programa canadiense de productos lácteos bajo el TLCAN) es hipócrita y nubla las posibilidades de una salida exitosa o de reformas necesarias. Varios grupos alimentarios y agrícolas de Estados Unidos se reunieron a principios de 2017 para pedir un enfoque diferente en el TLCAN, que permita a los países a “proteger a sus agricultores de las importaciones injustas que distorsionan el mercado interno, socavan los precios y comprometen la viabilidad económica de agricultores independientes”.

Las conclusiones del IATP subrayan la necesidad de un nuevo enfoque de las normas comerciales mundiales, un enfoque que respete la obligación de los gobiernos de proteger la seguridad alimentaria en el país, que respete la compleja relación de los sistemas alimentarios con el desarrollo económico y que respete la importancia de la rendición de cuentas, tanto en los países ricos como en los pobres. Es el momento de establecer reglas claras y fuertes que valoren retornos más equitativos para la producción y distribución de alimentos dentro de la cadena de suministro, así como precios estables y predecibles de los alimentos. 🍌

*Este texto es un extracto de un documento mayor que próximamente publicará el IATP relativo al dumping en maíz, trigo, soya, arroz y algodón.



NUEVOS ENFOQUES EN EL DEBATE DEL AGRO EN EL MARCO DEL TLCAN; REFLEXIONES DE IATP

El debate de los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sobre la agricultura ha cambiado radicalmente al paso de los 23 años de vigencia de este acuerdo.

“Ya no es sólo cuestión de desde dónde y adónde va el trigo o el maíz, sino se trata de analizar movimientos transfronterizos, que parecieran no tener lógica, de productos del agro, en particular de animales y de carne. Hay animales que van de Estados Unidos (EU) a México, los engordan allá, regresan a Estados Unidos para su procesamiento y se exporta la carne a México y otros países. Ligado a esto, y habría que ver si ocurre también en México y cómo ocurre, en EU la producción industrial de animales está generando fuertes desafíos a escala local, en las comunidades, con una contaminación del agua espantosa, desechos animales, problemas laborales y de bienestar de los animales. Y hay grupos estatales y nacionales que quieren enfrentar esto, quieren crear restricciones a este tipo de producción”.

Karen Hansen-Kuhn, directora de Comercio y Gobernanza Global del Institute for Agriculture and Trade Policies (IATP) –organización con sede en Minneapolis, Minnesota– señaló lo anterior y comentó que los movimientos

transfronterizos de mercancías escapan de la visión y del control de los agroproductores; ellos están en su comunidad y se allegan de información específica para tomar sus decisiones. Quienes realizan ese comercio que aparentemente es irracional son las grandes corporaciones transnacionales, que cuentan con grandes recursos financieros e información, a tal punto que pueden mover aspectos de su producción y comercio rápidamente respondiendo a su interés de lucro.

“Entonces, tenemos que ver esto no como cadenas de producción, sino como redes de producción, que son como telarañas, y algunos de sus sustentos son las reglas del TLCAN, pero también la Ley Agrícola de EU (la Farm Bill) y la Ley de Comercio de EU, “que van juntas”.

Por otra parte, dijo, el IATP ha realizado análisis de *dumping* de granos –que afecta a los productores de México, por importaciones desde Estados Unidos–, y el estudio se ha hecho complejo conforme hay vaivenes en los precios internacionales de los granos. Durante la reciente época de precios altos, el fenómeno del *dumping* se desvaneció. Y lo que siguió fue que los productores de EU se vieron estimulados por esos precios y produjeron más y más y ahora los precios han caído. “Los ingresos de los productores



FOTOS: Edgardo Mendoza / ANEC

bajaron en 50 por ciento respecto de hace tres años”.

Así, “hay crisis en todas las zonas rurales de EU. Entonces los productores de Estados Unidos no ganaron con el TLCAN, ellos perdieron, y los productores de México también perdieron. Esto tiene que ver con las reglas del TLCAN, y no sólo la cuestión de la desgravación arancelaria, sino también la inversión en las cadenas productivas, en especial la de la carne”.

Hansen-Kuhn consideró que tanto los agroproductores de Estados Unidos como los de México a escala local “quieren un modelo diferente, una producción sostenible, ingresos más estables. Tenemos que entender que la situación actual es distinta a lo que fue hace 23 años y debemos pensar qué condiciones deben cambiar. Eliminar el TLCAN no solucionaría el problema. Se habla de que en la renegociación del TLCAN se quieren usar elementos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación (TPP, por sus siglas en inglés), lo cual preocupa. Tenemos que ver cómo se insertarían tales elementos del TPP y debemos educar a las poblaciones sobre cómo deben resistir”.

Si uno entiende que los conflictos actuales en el agro no son sólo debidos a un factor, sino a un conjunto de factores, habría maneras de desmarañar el problema y comprenderlo mejor, dijo.

Comentó que hoy día en Estados Unidos hay preocupación entre los productores agrícolas ante la idea de que el TLCAN pudiera cancelarse, “y es que ellos tienen siempre el argumento de que las exporta-

ciones son la base de la economía rural, y de allí que en época de buenos precios produzcan más y más. “Es como ir corriendo a toda velocidad pero sin llegar a ningún lado. Los productores están enganchados en este sistema de producción masiva de granos y carne, con una oferta que echa abajo los precios, y ellos no han logrado reconocer ampliamente que no van a ganar con este sistema. Tenemos que echar atrás estas ideas, desmentir sus argumentos”.

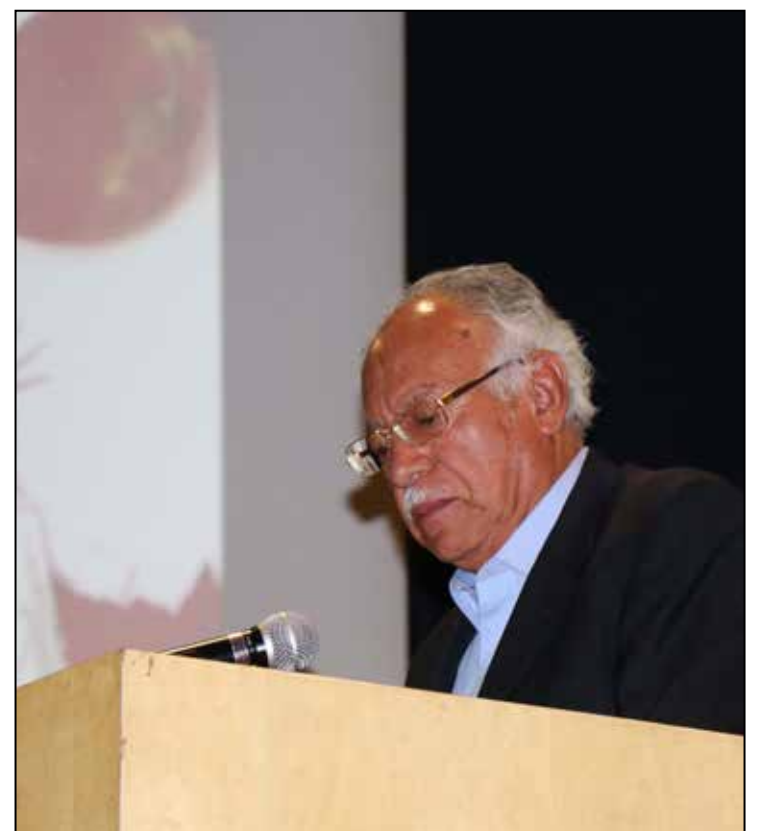
“Necesitamos, concluyó, un sistema de producción agrícola más localizado, más integral, más sostenible, que reconozca al medio ambiente y a las formas locales de producción y de intercambio. En

México hay procesos en marcha en ese sentido, por ejemplo lo que hace la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), con una visión agroecológica marcando su trabajo; en EU también se experimenta un gran crecimiento de producción más pequeña, más localizada, para venta local, más sostenible... no está al nivel de reemplazar a los grandes, pero implica un cambio cultural, pues involucra relaciones locales estrechas.

Si queremos llegar a un sistema más pensado de esa forma, tenemos que generar una transición entre la agricultura dominada por los grandes y lo que buscamos, dijo (LER).



Karen Hansen-Kuhn



EL DE TRUMP, DISCURSO POPULISTA VS PROGRAMA NEOLIBERAL*

William Robinson Profesor de Sociología en la Universidad de California, recinto Santa Bárbara. Afiliado al Programa de estudios Latinoamericanos e Ibéricos y a Programa de Estudios Globales e Internacionales de la propia Universidad. Autor de varios libros, los más recientes: *Global Capitalism and the Crisis of Humanity* y *Latin America and Global Capitalism*

Para entender el trumpismo y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la coyuntura actual, es urgente no confundir el discurso público de Trump con la esencia de su programa. Además es necesario reconocer que las dinámicas políticas y sociales en general, y en este caso concreto del trumpismo, son por su naturaleza muy contradictorias. No debería sorprendernos eso.

Si bien no se le puede ignorar, el discurso nacionalista y populista de Trump es en mi opinión más artimaña que esencia. Las élites políticas y económicas de Estados Unidos no pueden ni quieren dar marcha atrás a la globalización ni a las interdependencias que ésta acarrea. La economía global es una vasta cadena de subcontratación y de *outsourcing* y todos los países han sido integrados a un nuevo sistema globalizado de producción y financiación. De hecho ya no hay economías nacionales, sino que cada país es un componente nacional de la economía global.

Aunque pudiera, el gobierno de Trump no desea ni pretende dismantlar este sistema. Él es miembro de lo que yo llamo la clase capitalista transnacional y su vasto imperio empresarial es dependiente de la economía global. Además, su gabinete está repleto de banqueros y empresarios de la economía global. Vale entonces la pena reiterar y recalcar que estos grupos dominantes de Estados Unidos, de la elite política y económica, no tienen interés ni capacidad de retirarse de la economía global.

¿Cuál es entonces el programa económico de Trump? Abarca, primero, la desregulación total; segundo, el dismantamiento del Estado social, es decir vastos recortes del gasto social, una aceleración de las privatizaciones, la reducción de los impuestos a los pudientes y mayores subsidios al capital privado. Evidentemente, se trata de un programa neoliberal. A pesar de ciertos conflictos y de la inquietud que genera el discurso populista de Trump, los empresarios y más específicamente la clase capitalista transnacional están encantados con este programa.

Entonces, gran interrogante: ¿cómo explicamos el discurso nacionalista y populista de Trump? Hay que reconocer una contradicción fundamental. Que hay un desfase entre una economía globalizada y un sistema de autoridad

política basado en el Estado-nación y este desfase genera fuertes contradicciones y varios dilemas para los Estados. Los gobiernos necesitan legitimarse a nivel del Estado nacional y al mismo tiempo necesitan promover la acumulación de capitales transnacionales en sus territorios. Para decirlo en términos más académicos, el Estado-nación enfrenta una contradicción entre su función de promover la acumulación transnacional y su función de lograr la legitimidad política en el Estado-nación.

Mientras más se promueve la globalización capitalista, más se agrava el problema de la legitimidad. El trumpismo pretende resolver



William Robinson

esta contradicción. Carl von Clausewitz el gran estratega militar prusiano, dijo que la guerra es una extensión de la política por otros medios; podríamos decir en este caso que el trumpismo es la extensión de la globalización capitalista por otros medios.

El discurso legitimador de Trump es el populismo y el nacionalismo. Pero en su esencia el programa de Trump no tiene nada de populista. ¿Cómo logró el equipo de Trump cultivar una importante base social y electoral en Estados Unidos? Primero, con un discurso ideológico de *Make America great again* (MAGA, Hacer grande a Estados Unidos otra vez); segundo, con la promesa de crear empleos, obligando al capital transnacional a no salir del territorio de EU o que regrese y vuelva a invertir en EU, y tercero, y muy importante, logró captar una base social y electoral, y en la actualidad es su base social, con un discurso racista y de fanfarronería. Este punto es muy importante y vale la pena analizarlo:

Históricamente, un importante sector de la base obrera de EU, desproporcionadamente blanco, ha gozado de altos niveles de vida, gracias a la supremacía blanca, y fue convertida en una aristocracia laboral del primer mundo y de Estados Unidos. Pero ahora con la globalización capitalista, la clase capitalista transnacional ya no necesita a esa aristocracia laboral, y ese sector experimenta cada vez más una movilidad hacia abajo, una creciente inseguridad y desestabilización de sus condiciones laborales y de vida. Esta es la famosa *tercermundialización* del primer mundo, o la precarización de ese sector, que era esa clase obrera privilegiada.



William Robinson

Esta situación genera para el Estado y las élites graves problemas de legitimidad, y con el racismo, y un discurso racista desde arriba, el trumpismo busca canalizar a ese sector hacia una conciencia racista y hasta neofascista de su condición y busca convertir a ese sector —que, repito, conforma la plataforma social y electoral de Trump entre la clase obrera— en base social para un proyecto de fascismo del siglo XXI.

En ese sentido, los migrantes latinos, en su mayoría mexicanos y centroamericanos, se convierten en chivos expiatorios de la crisis, para canalizar el temor y las inseguridades de ese sector laboral, para que ese sector no cuestione al sistema.

Vale señalar que Trump y la clase capitalista transnacional dependen de la mano de obra inmigrante, y no pueden y no pretenden deshacerse de ella. Con la intensificación de la guerra contra los inmigrantes, el trumpismo pretende,

además de tener a ese chivo expiatorio, desarticular la capacidad de acción política de las comunidades inmigrantes y desarticular sus resistencias. Hay que ver aquí que el suministro de mano de obra barata inmigrante ha ocurrido por medio de la no documentación desde que se acabó el Programa Bracero en los años 60's, y esta fórmula de no documentación, que ha permitido la súper explotación y el súper control, sirvió durante varias décadas pero ya no sirve a los empresarios y la elite política y económica. Y para el Estado —para el trumpismo y administraciones anteriores— pues es demasiado difícil controlar y manejar ese suministro de mano de obra.

Lo que se busca ahora es sostener la súper explotación de mano de obra inmigrante con un recambio desde la vía no documentada hacia un nuevo sistema bracero generalizado. Es decir organizar la súper explotación y el súper control por medio de programas de trabajadores visados.

Volviendo al tema del neofascismo, si bien en estos momentos Estados Unidos no es fascista, quiero identificar aquí el surgimiento de movimientos fascistas dentro de la sociedad civil de este país, envaletonados por Trump. Hay que considerar que el sistema político de EU sufre una crisis creciente de hegemonía, al mismo tiempo que la economía global tambalea y enfrenta el espectro de un estancamiento y otro colapso en el horizonte, ya que las estructuras subyacentes de la economía global están muy pero muy inestables. Importante mencionar que otra parte esencial del trumpismo es la extensión del estado policiaco en EU, de las políticas guerreristas alrededor del mundo y de lo que yo llamo la acumulación militarizada.

¿Por qué Trump arremete contra el TLCAN? Es parte de su discurso ideológico frente a su base social y política de la sociedad estadounidense, es un requisito prácticamente. Si un político quiere ser electo, arremete contra las secuelas sociales de la globalización capitalista; también lo hizo Hillary Clinton y también lo hizo Barack Obama. Estamos claros que el capital transnacional no puede echar a la borda al TLCAN.

Es cierto que EU tiene un enorme déficit comercial con México, pero los datos de Estado-nación esconden las relaciones clasistas transnacionales y la esencia de las generaciones de capital transnacio-

nal. Es decir, las exportaciones que van de territorio mexicano a territorio de EU no son de México a EU, sino de cooperaciones transnacionales alrededor del mundo que van de uno a otro territorio. Cuando Trump dice que va a hacer competitivo a EU, lo que quiere decir es que las clases obreras de EU sean competitiva *versus* las clases obreras de China, de México y alrededor del mundo. Es decir que detrás del discurso populista, quiere echar hacia abajo los salarios y las prestaciones de la clase obrera de EU, incluyendo una mayor flexibilización y desindustrialización de la clase obrera. Es decir, el trumpismo va contra la clase obrera de EU y contra la global, y en su esencia no tiene nada de populismo.

Por otro lado, hay aspectos del TLCAN que no son del agrado a la clase capitalista transnacional, incluyendo las exenciones a los hidrocarburos y el código laboral.

Y hay un asunto más importante aún, y esto llega al meollo:

Desde que se negoció el TLCAN a fines de 80's y principios 90's el capital global ha seguido su desarrollo y su proceso constante de transformación. En 1994, cuando entró en vigor el Tratado, ni siquiera existía la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se formó en 1995. Y la OMC y los tratados de libre comercio se enfocaban en un principio a levantar barreras nacionales al establecimiento del emergente sistema globalizado de finanzas, pero con el paso de estos 22-23 años la transnacionalización de los servicios se ha movido al centro de la agenda de la globalización capitalista, junto con la llamada economía digital. Son estas dimensiones las que más bien preocupan a los gobernantes de EU y a la clase capitalista transnacional. Es decir, hay que renovar y renegociar todo el marco de la globalización capitalista para acabar la transnacionalización de esos servicios y de la nueva economía digital y de plataforma. Respecto de la renegociación del TLCAN, recordemos que el representante comercial de EU, Larry Rubin, encargado de la renegociación, ya declaró que el objetivo es modernizar y actualizar el tratado, no echarlo a la borda. 🍌

* Ponencia presentada por videoconferencia durante el Encuentro de Organizaciones Sociales Canadá, Estados Unidos, México. Por Nuevas Formas de Cooperación Internacional (26 y 27 de mayo).

COMBATAMOS A LAS GRANJAS FABRILES

Ben Lilliston Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) BLilliston@iatp.org



FOTO: Gunnar Richter



FOTO: Ilamar K.

En ciertos días en el condado de Duplin, Carolina del Norte, muchos residentes no pueden salir porque la contaminación del aire irrita sus ojos. Algunas comunidades latinas en el Valle de San Joaquín, California, y residentes rurales blancos en el condado de Kewaunee, Wisconsin, ya no pueden beber su agua debido a la contaminación. La fuente de esos problemas en estos tres lugares de Estados Unidos es la misma: las Operaciones Confinadas de Alimentación Animal (CAFOs, por sus siglas en inglés), también llamadas *factory farms* o granjas fabriles.

El rápido crecimiento de las granjas industriales durante los 20 años recientes ha sido acelerado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Estas granjas, donde miles o incluso decenas de miles de animales viven juntos y hacinados, están cada vez más vinculadas a graves problemas ambientales, de salud y económicos en las comunidades rurales de Estados Unidos.

Las CAFOs abastecen directamente a algunas de las compañías de carnes y aves más grandes del mundo, como el gigante de cerdos Smithfield, el gigante de carne de aves de corral JBS y el gigante avícola Tyson's. Estos gigantes de la carne tienen operaciones en toda América del Norte. Por ejemplo, Smithfield tiene *joint ventures* en México con Granjas Carroll de México y Norson. La división avícola de JBS USA, Pilgrim's de Mexico, tiene múltiples instalaciones en todo México. Cargill, el monstruo de la carne y de la alimentación animal, tiene 30 establecimientos en 13 entidades mexicanas.

El TLCAN ha ayudado a concentrar el poder y la propiedad de estas compañías para crear un sistema de carne totalmente integrado en la región de América del Norte. Por ejemplo, las normas de seguridad alimentaria de los tres países se armonizaron para facilitar aún más el comercio. Y las transacciones de granos forrajeros, como el maíz y la soya genéticamente

modificados, y el movimiento de los propios animales ahora fluyen libres de aranceles a través de las fronteras. Los bovinos nacidos en México o Canadá pueden ser engordados y sacrificados en Estados Unidos. En 2016, EU importó más de 940 mil bovinos de México, aproximadamente la mitad en tamaños listos para el sacrificio, y exportó casi 182 mil toneladas de carne a México. En el marco del sistema de granja fabril, el movimiento de los animales ha diseminado las enfermedades animales entre los países, desde el virus de PED del lechón y la gripe aviar hasta "la enfermedad de las vacas locas".

La expansión de las granjas fabriles en Estados Unidos, particularmente en la producción de aves y cerdos, ha llevado a la pérdida de granjas familiares independientes, y ahora son menos pero más grandes las granjas existentes, que están ligadas estrechamente a las grandes compañías cárnicas. Este modelo también se vincula de forma muy directa con la producción

por contrato. En Estados Unidos, casi toda la producción avícola y la mayor parte de la porcina se realizan por medio de contratos que funcionan así: las empresas proporcionan a los granjeros los pollitos y determinan qué alimentos deben éstos consumir, así como los espacios donde deben habitar y los métodos de producción. Tales esquemas han sido muy criticados en el sentido de que son injustos para los granjeros, pues éstos son los responsables de los costos iniciales, de las deudas asociadas y de otros riesgos financieros, y lo que reciben de las empresas cárnicas resulta poco equitativo para cubrir esos costos y riesgos.

LOS DAÑOS DE LAS GRANJAS FABRILES SE DERRAMAN LITERALMENTE EN LAS COMUNIDADES CIRCUNDANTES. EN EL CONDADO DE DUPLIN, CAROLINA DEL NORTE, SE INSTALA LAS CAFOs DE CERDOS MÁS GRANDES DEL PAÍS. LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y DEL AGUA DE SUS INSTALACIONES AFECTAN LA SALUD Y CALIDAD DE LA VIDA DE LA COMUNIDAD, QUE ES SOBRE TODO AFROAMERICANA.

Los daños de las granjas fabriles se derraman literalmente en las comunidades circundantes. En el condado de Duplin, Carolina del Norte, se instala las CAFOs de cerdos más grandes del país. La contaminación del aire y del agua de sus instalaciones afectan la salud y calidad de la vida de la comunidad, que es sobre todo afroamericana. Al igual que las CAFOs de vacas de California, muchas de las CAFOs están ubicadas en comunidades pobres de gente negra. Los residentes de las comunidades se han organizado y trabajan con grupos ambientalistas para demandar a los reguladores estadounidenses por la falta de cumplimiento de las leyes de contaminación del agua y el aire y la discriminación racial en la ubicación de estas granjas industriales.

Las CAFOs también representan nuevas amenazas para la salud humana. El tener demasiados animales juntos en espacios insuficientes a menudo requiere el uso intensivo de antibióticos para ayudar a las aves de corral o a los cerdos a crecer más rápido y sobrevivir. Se calcula que en las CAFO se registra el 80 por ciento de los

antibióticos utilizados en Estados Unidos. El rápido crecimiento de las bacterias resistentes a los antibióticos se ha convertido en una amenaza mundial reconocida por la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de las principales organizaciones de salud estadounidenses han pedido la prohibición del uso de antibióticos en animales sanos dentro del sistema de granjas fabriles.

Las granjas fabriles estadounidenses, en particular las CAFOs de vacas, dependen de la mano de obra de nuevos inmigrantes, a menudo de México. Las condiciones de trabajo pueden ser difíciles y los trabajadores son por lo general indocumentados y por tanto con pocas protecciones legales. Trabajadores inmigrantes latinos en la industria láctea de Nueva York publicaron este mes un informe que documenta malos tratos, incluyendo lesiones en el trabajo, intimidación, vivienda deficiente y largas horas laborales con baja remuneración. La industria lechera está particularmente preocupada por las agresivas políticas anti-inmigrantes de la Administración Trump y advierte que el precio de la leche podría dispararse si dejan de contar con el trabajo inmigrante de bajo costo.

Muchos grupos comunitarios de base; organizaciones ambientalistas, de salud y de consumidores, y grupos de agroproductores familiares independientes están luchando contra la expansión de estas granjas industriales en Estados Unidos. Piden una aplicación más estricta de las leyes existentes sobre el agua potable y la contaminación atmosférica; prohibir las granjas industriales que perjudican a su comunidad; frenar el uso de aditivos para la alimentación animal para proteger la salud pública, y contratos y mercados más justos para los granjeros.

Pero estas luchas no serán exitosas en última instancia si simplemente se mueven esas granjas fabriles a otras localidades de Estados Unidos o a México o a Canadá. Es importante que las organizaciones de la sociedad civil de los tres países trabajen juntas en solidaridad para oponerse al modelo CAFO y al daño que éste hace a nuestro recursos agua y aire, a nuestra salud y a las poblaciones. Una renegociación del TLCAN no debe validar a las compañías mundiales de carne y no debe frenar a las comunidades que luchan contra las granjas industriales, sino apoyar los esfuerzos para contar con sistemas locales de alimentos sostenibles que sean buenos para los agricultores y granjeros, los trabajadores, las comunidades rurales y nuestra salud. 🌱

DERROTAMOS AL TPP Y ESTAMOS FUERTES PARA DEFENDER DERECHOS LABORALES, AGRÍCOLAS Y DEL MEDIO AMBIENTE: CIUDADANOS DE EU*

Arthur Stamoulis Director ejecutivo de Citizens Trade Campaign, de EU

Nuestra coalición, Citizens Trade, tiene una base de consumidores, familias agricultoras, trabajadores y defensores del medio ambiente, así como organizaciones de fe, las cuales juntas representan más de 12 millones de estadounidenses.

Si se quisiera una foto periodística de cómo Estados Unidos (EU) observa el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tendríamos a Donald Trump y su nacionalismo económico y xenofóbico por un lado y a los promotores de los negocios al estilo del neoliberalismo por el otro.

Pero esto no es una representación certera del rango de debate entre la autoridad, la sociedad civil, el Congreso de EU y el gran público.

La oposición de nuestra coalición a tratados comerciales corporativos como el TLCAN ha sido siempre basada en el respeto a los derechos de los trabajadores a lo largo del planeta, un compromiso con la justicia ambiental y la búsqueda de un nuevo modelo de comercio que ponga las necesidades humanas por delante de las ganancias corporativas.

En enero de este año enviamos una carta al señor Trump detallando los cambios que hemos impulsado a efecto de hacer una política comercial mejor para las familias trabajadoras. Expresamos los cambios necesarios en las diez principales áreas de los derechos de los trabajadores y justicia climática, para tener soberanía alimentaria, para acceder a medicinas y más.

No está por demás decir que el muro gigante no está en nuestra lista. Nos oponemos al muro fronterizo de Trump, y nos oponemos a cualquier intento de que los trabajadores mexicanos sean los chivos expiatorios –y los canadienses también– en este asunto.

No importa cómo Trump trate de conducir el debate comercial en términos de EU versus el resto del mundo, entendemos que eso realmente significa elites corporativas contra todos los demás, contra todos nosotros.

Entendemos que una razón principal de que las grandes corporaciones han impulsado al TLCAN y han promovido acuerdos comerciales similares es porque así ellas pueden cambiar puestos de trabajo alrededor del planeta, y de esa forma los trabajadores son los



Arthur Stamoulis

más explotados y las regulaciones ambientales son debilitadas lo más que se puede.

Esa carrera global hacia el fondo –junto con la desregulación, la privatización y el puño puesto en el ámbito de las políticas públicas– está golpeando a la clase trabajadora en todo lugar, y sólo será abatida con políticas que fortalezcan las condiciones y los salarios de los trabajadores y mejoren la calidad de vida en todos los países del planeta.

Y déjenme decir que nosotros reconocemos que las familias trabajadoras y las agricultoras han sido golpeadas duramente por el TLCAN, y ellas han visto desaparecer fuentes de trabajo, han visto declinar sus salarios; mucha gente ha retrocedido económicamente, en lugar de avanzar, debido al TLCAN y debido a acuerdos subsecuentes de comercio.

Y reconocemos que la mayoría de agricultores y trabajadores mexicanos han sido golpeados aún más duro, muchas veces han sido obligados y desplazados hacia una migración forzada.

Por tanto, estamos comprometidos a luchar junto a ustedes (sociedad civil de México y Canadá) para reemplazar el TLCAN que se centra en las corporaciones, con políticas que pongan a la gente antes que a las ganancias a lo largo de América del Norte y más allá.

A mediados de mayo, la administración Trump dio al Congreso la noticia oficial de su intención de modernizar el TLCAN. Bajo las leyes de EU (que dan al Congreso 90 días para analizar el planteamiento), las negociaciones pueden comenzar formalmente la segunda quincena de agosto.

Ya los grupos de cabildo corporativos, y de hecho muchos grupos de la propia administración de Trump, están presionando para que esta negociación implique insertar en el TLCAN algunas de las peores cláusulas del fallido Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).

Si la renegociación del TLCAN es dictada por las mismas elites corporativas, colocarán el TLCAN y el TPP juntos, en primer lugar, y el pacto podría llegar a ser peor para las familias trabajadoras, para la salud pública y para el medio ambiente en los tres países.

Entre otras cosas, el acceso a medicina genérica podría ser más restringido; en la agricultura se podría fortalecer el proceso de concentración en pocas manos, los bancos y las compañías de seguros entrarían a una desregulación mayor y se dificultaría todavía más poner en marcha políticas relacionadas con el cambio climático. Esto, sin mencionar los numerosos problemas existentes, generados por el TLCAN, que no se han resuelto y que ni siquiera son debidamente reconocidos.

Así, nuestra coalición ha comenzado ya a movilizarse en contra de esto. Como he dicho, en enero, hicimos públicas nuestras demandas propias, así como nuestros puntos de referencia de lo que debe ser

parte de un acuerdo de reemplazo del TLCAN, de lo que debe incluir, y de no ser así, habrán de enfrentar nuestra oposición feroz.

Hemos comenzado a realizar un cabildo con cruce de intereses de los sectores ante el Congreso de Estados Unidos para educar a los senadores y a los representantes en estos puntos, y hemos comenzado a organizarnos para educar a nuestra base de activistas también a lo largo de Estados Unidos. Tuvimos nuestra reunión general hace unos días, y participaron más de 250 organizaciones que están comprometidas con esta posición.

Sabemos que el tiempo es limitado y nos estamos re-movilizando. Somos un “movimiento de movimientos” doméstico –compuesto literalmente de miles de organizaciones y millones de individuos que exitosamente construyeron una mayoría congresional contra el TPP en los años recientes y que frenaron la aprobación de este TPP en Estados Unidos.

Puesto en palabras simples, estamos muy en guardia en contra de las políticas corporativistas, neoliberales que han estado envueltas en una retórica nacionalista, y estamos preparados para enfrentarlas. Al mismo tiempo, permanecemos muy abiertos para trabajar con todos ustedes (sociedad mexicana y canadiense), en áreas temáticas y a través de las fronteras, para impulsar nuevas políticas que son necesarias, desesperadamente necesarias. 🍌

*Ponencia presentada durante el Encuentro de Organizaciones Sociales Canadá, Estados Unidos, México. Por Nuevas Formas de Cooperación Internacional (26 y 27 de mayo).

FOTOS: Edgardo Mendoza / ANEC



CONVENIOS INTERNACIONALES VIOLENTAN DERECHO A LA INFORMACIÓN DE CONSUMIDORES: PUBLIC CITIZEN

El derecho de los consumidores a conocer los ingredientes y el origen de lo que comen resulta vulnerado por los acuerdos internacionales de comercio e incluso por la Organización Mundial de Comercio (OMC), como se observa en una experiencia reciente, y eso es muy preocupante pues “aunque se piensa que a los consumidores debe interesar que los productos tengan precios accesibles y deben estar felices porque los tratados de comercio bajan los costos, en realidad nuestros intereses van más allá de costos y elección. Queremos tener productos sanos, proteger la salud y el medio ambiente y contar con marcos regulatorios para las empresas”.

Afirmó lo anterior Melinda St. Louis, directora de Campañas Internacionales de Public Citizen, una organización de consumidores presente en todo Estados Unidos con 400 mil miembros, e integrante de la Campaña Ciudadana de Comercio, que es una coalición muy amplia de agrupaciones ambientalistas, sindicales y otros.

Precisó que en fechas recientes Estados Unidos perdió un caso en la OMC sobre el etiquetado de la carne (que establecía el origen). El fallo de la OMC determinó que ese mecanismo representa un obstáculo para el comercio y “si hubiéramos continuado con el etiquetado, surgirían demandas de los empresarios afectados exigiendo indemnizaciones por más de mil millones de dólares. Por el ello el Congreso atendió a la OMC y quitó la etiqueta”.

Esto, agregó, afecta a los consumidores por el hecho en sí, y además sienta un precedente. “Hay varios estados que tienen una legislación para etiquetar transgénicos y están muy preocupados. El resultado de la OMC va en contra del derecho a la información, algo que es muy básico, pues ni siquiera estamos diciendo que no vamos a comprar, queremos saber de dónde y que contiene nuestra comida. Los mecanismos internacionales de comercio cuentan con un sistema de controversias que tiende a proteger a las corporaciones transnacionales en detrimento de los consumidores. Y digo transnacionales porque las empresas medianas y pequeñas carecen de recursos para participar en tribunales internacionales. Eso nos preocupa”.

La entrevistada precisó que Public Citizen agrupa a consumidores de todo tipo, no sólo de alimentos, y forma parte de una red de consumidores trasatlántica, con países europeos. “Nos preocupa, dijo, las acciones del presidente Donald Trump, pues él en sí es una corporación multinacional. Su nombre es la marca. Por supuesto que sus intereses van a ser los mismos que los que defienden las transnacionales; sus asesores son representantes de esas empresas, y hemos visto su gabinete: los funcionarios vienen de grandes corporativos financieros. Y Trump, además, ni siquiera ha informado de sus inversiones en Canadá y México y tampoco es transparente en su información de impuestos. Los intereses que defienden son los mismos que impulsaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte



Melinda St. Louis

(TLCAN) y otros TLCs. Aunque él maneja una retórica populista, sabemos, porque así se filtró, que buscar renegociar el TLCAN imponiendo casi lo mismo del [hoy frenado] Acuerdo Transpacífico de Cooperación (TPP), con normas, acuerdos, que fortalecen los

beneficios para las transnacionales, empresas con un poder insólito para atacar las protecciones a favor de los consumidores”.

Por eso, agregó, resulta crítico demandar la transparencia en las renegociaciones del TLCAN.

“¿Qué capacidad de cabildeo tienen como organización para influir en las renegociaciones del TLCAN?”

“No contamos con el mismo nivel de dinero que tienen las transnacionales. Pero tenemos votantes, personas; nos organizamos y hablamos francamente con los congresistas, nos organizamos con nuestros aliados sindicalistas y ambientalistas. Y en la lucha contra el TPP sí incidimos para lograr una mayoría en el Congreso. Eso fue una victoria de los movimientos sociales en Estados Unidos. Durante 2016 la Cámara de Comercio y la Casa Blanca expresaron como prioridad la ratificación del TPP, pero como sociedad, consumidores, trabajadores, activistas, presionamos y la mayoría en el Congreso rechazó ese acuerdo. Los congresistas estuvieron recibiendo mucha presión de empresas y su dinero también. Pero sabían que 2016 era año electoral y sus votantes podían echarlos afuera. Así que nuestra presión tuvo un impacto. Hoy tenemos que rehacer esas redes y movimientos para incidir en la renegociación del TLCAN.”

“Por eso estamos aquí [en el encuentro trinacional] y nos parece muy importante. Para nosotros es fundamental diferenciarnos de la retórica xenofóbica, de odio y de discurso antimexicano que tiene nuestro gobierno. Nuestra crítica al TLCAN no es así. Es porque las grandes corporaciones son las que están ganando y tenemos que unirnos de forma transfronteriza para confrontar y contrarrestar a estas transnacionales” (LER).

FOTO: Lourdes E. Rudiño



FOTOS: Edgardo Mendoza / ANEC



TRABAJADORES DE EU, PRECARIZADOS POR EL TLCAN, SE SOLIDARIZAN CON MIGRANTES

Durante los 23 años que suma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la clase trabajadora en Estados Unidos (EU) ha tendido hacia la precarización; el 40 por ciento de la fuerza laboral del país está en una situación inestable, no regular, con trabajo no fijo y podría estar siendo denominada con un eufemismo como “trabajadores independientes”, afirmó Brian Finnegan, coordinador de Derechos Globales de los Trabajadores de la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO).

“Hay muchas formas para distanciar al empleador respecto del trabajador, por medio de la subcontratación, la terciarización u otros conceptos ficción, como eso de ser trabajador independiente o trabajador a pedido como Uber. En realidad no hay vínculos laborales, no hay seguridad social, no hay seguro de desempleo para esas personas”.

Y esto evidentemente ha propiciado una baja en la densidad sindical, esto significa que es cada vez menor el porcentaje de la fuerza laboral que tiene un sindicato con un contrato colectivo. El porcentaje actual es de 11, y en el sector privado específicamente es de siete por ciento. Esta tendencia a la baja ocurre desde los años 60's del siglo pasado pero se aceleró a partir de los 80's.

El debilitamiento de los trabajadores en Estados Unidos tiene que ver por supuesto con el aumento del poder de las corporaciones y la concentración de la riqueza cada vez en menos manos, a lo cual el TLCAN ha contribuido. “Hace 30 o 40 años la proporción de ingreso entre un trabajador común y corriente en EU y un alto ejecutivo empresarial era de un dólar contra 40, ahora es de uno contra 325, y sé que en Canadá hay también ese ensanchamiento de la brecha pero las cifras no son tan horribles”.

Es indispensable la unión de esfuerzos entre los trabajadores y en

general los diversos sectores de la sociedad de México, EU y Canadá que se han visto afectados por el TLCAN, pues la unión hace la fuerza. Es un hecho que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación (TPP, por sus siglas en inglés) fue frenado en el Congreso de EU gracias al cabildeo y los esfuerzos que hicieron sindicatos y diversos conglomerados, “y eso ocurrió en Estados Unidos pero también en varios países”. Además, la unión de fuerzas permite difundir situaciones tales como la amenaza que representan los tribunales privados establecidos en el marco del libre comercio para dirimir controversias entre Estados e inversionistas. Esos tribunales favorecen absolutamente a las grandes transnacionales.

“Pienso, dijo Finnegan, que hacer un bloque conjunto de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil ante la futura renegociación del TLCAN permitirá que hagamos propuestas claras, contundentes y exigentes. Y sólo

si vemos que no hay voluntad de nuestros gobiernos [para atender recomendaciones de la sociedad], iríamos a la movilización para decir ‘no’”.

Respecto de las amenazas del presidente Donald Trump contra los migrantes mexicanos, Finnegan consideró que éstas no se refieren directamente a los trabajadores agrícolas. “Habla de otros”. Mucho más de la mitad de los trabajadores en la agricultura de EU carecen de documentos; en su mayoría son mexicanos y de Centroamérica. Entonces, las empresas mismas, gente con granjas grandes, las multinacionales, no quieren perder esa fuerza laboral, pues no pagan suficiente como para atraer trabajadores migrantes con documentación y ciudadanos estadounidenses”.

Pero sí es un hecho, dijo, que esos migrantes carentes de documentos viven hoy día una situación constante de temor, que se agudizó con la llegada de Trump al poder. No acuden ni siquiera a la justicia cuando tienen problemas. Tienen miedo, dejan a los hijos en la casa; muchas veces no los llevan a la escuela, para poder así evadir a la migra.

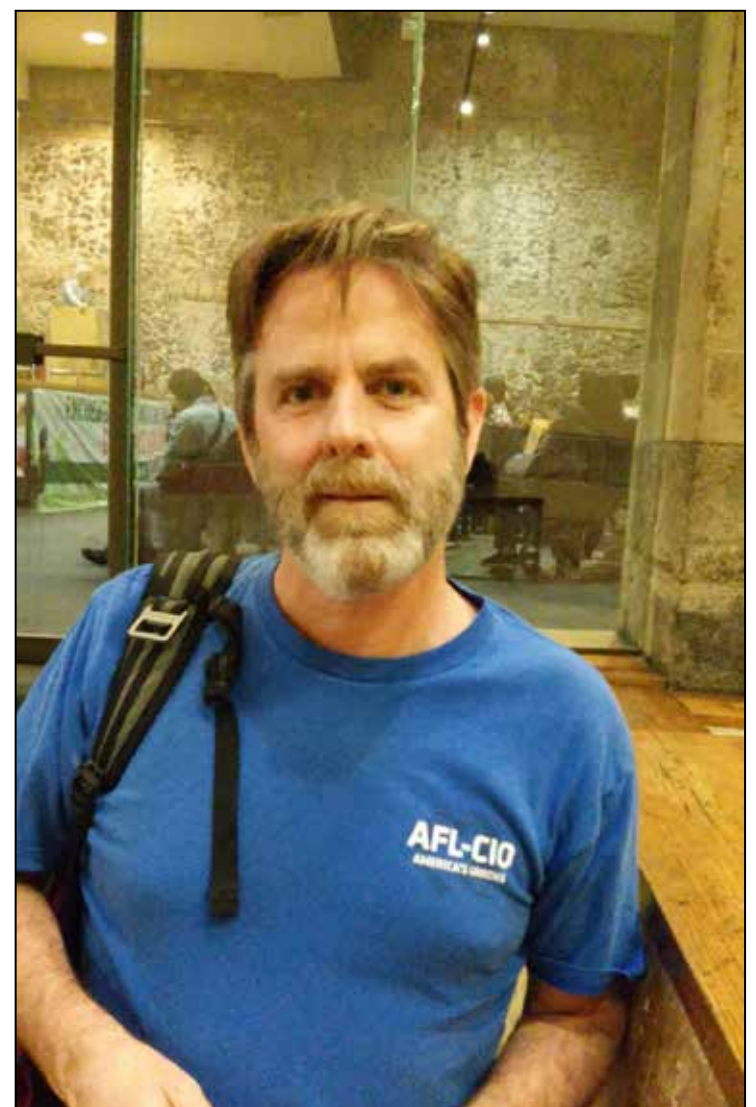
Brian Finnegan lamentó que México esté haciendo el trabajo sucio para frenar a los migrantes

que llegan desde Centroamérica. Esto ya venía desde el gobierno de Barak Obama, pero se está consolidando, y toma cada vez más una definición bélica. “Ni siquiera se hace esfuerzo para mantener la apariencia diplomática”. Y es claro que el tema de los derechos humanos brilla por su ausencia. El gobierno de Trump ha dejado bien claro que esto no es prioridad.

Como AFL-CIO, dijo, “desde hace años tenemos una posición clara pro migrantes, para decir que los derechos humanos laborales de ellos deben ser iguales a los de cualquier otra persona que trabaje en el país, ciudadanos, residentes, con o sin documentos. La AFL-CIO realiza esfuerzos para ayudar en el momento de redadas, en las comunidades, casas o lugares de trabajo y dando consejos. Pero también la agrupación sindical, la más importante de EU, trabajó durante los cinco o seis años recientes buscando reformas en las leyes de migración, si bien esto no tuvo buen final. “Nuestra intención siempre ha sido mejorar la situación de las personas, regularizar su ciudadanía. Y hoy estamos con este tema del TLCAN y vamos incluyendo cada vez más claramente el tema de los migrantes, para defender sus derechos. Los migrantes de cualquier país deben tener los mismos derechos de los trabajadores de EU” (LER).



FOTOS: Edgardo Mendoza / ANEC



Brian Finnegan

FOTO: Lourdes E. Rudíño

INCORPORAR CAMBIO CLIMÁTICO A TLCAN, PROPONEN AMBIENTALISTAS DE EU; GRAVE RIESGO POR CAPÍTULO XI DEL TRATADO

Un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) renegociado desde el interés del gobierno de Trump se perfila para ser peor de lo que ya es este acuerdo en sus condiciones originales, en particular en lo referido al medio ambiente, consideró Ben Beachy, consejero político para el Programa de Comercio de la organización ambientalista Sierra Club, con sede en Washington, DC.

El secretario de Comercio de Donald Trump, Wilbur Ross, multimillonario con intereses en las industrias siderúrgica y minera, “fue ejecutivo de una empresa de carbón en la que murieron 14 mineros”. El secretario de Estado es Rex Tillerson, quien ha dirigido Exxon Mobil –firma que junto con la francesa Total planean invertir 6 mil 643 millones de dólares para la exploración y desarrollo en México del bloque 2 de la Ronda 1.4, que ganaron el pasado 5 de diciembre en la licitación petrolera–; “el pagó millones de dólares para ocultar los efectos que tiene el cambio climático en nuestras comunidades”. En fin, el gabinete de Trump está lleno de ejecutivos y financieros que tienen muy claro su interés empresarial en el nuevo TLCAN, señaló Beachy.

“Quieren hacer oleoductos, quieren hacer *fracking*, quieren impulsar la minería, y rechazan la creación de empleos en energía renovable, que es el camino ideal hacia el futuro. Por eso debemos estar prevenidos de esta visión de Trump y al mismo tiempo impulsar una visión alternativa que beneficie a nuestro planeta, antes que generar ganancia para los empresarios de industrias extractivas”, señaló Beachy ante los asistentes al Encuentro de Organizaciones Sociales Canadá, Estados Unidos, México. Por Nuevas Formas de Cooperación Internacional, realizado en la Ciudad de México el 26 y 27 de mayo.

El TLCAN, comentó, se negoció a fines de los 80’s e inicios de los 90’s cuando todavía no teníamos un gran conocimiento del cambio climático. “Hoy vemos sus consecuencias, como son tormentas cada vez más desastrosas para nuestras comunidades, mares que sufren destrucción, sequías severas como la de Centroamérica con efectos de pérdidas de cosechas y hambre”.

El desafío de la sociedad de influir en las renegociaciones del TLCAN es crítico, pues hasta hoy el tratado ha beneficiado a



Ben Beachy

las empresas extractivas y contaminantes. “Cuando en el pasado hemos querido tomar acción, por ejemplo en Canadá y Estados Unidos contra el *fracking* o en México contra los oleoductos, ¿qué hacen esos consorcios? Acuden a los tribunales para dirimir las controversias Estado-inversionistas, considerados en el Capítulo XI del TLCAN. Estos tribunales fallan generalmente a favor de los inversionistas y son compensados económicamente con nuestros recursos, con recursos públicos”.

Las empresas pueden utilizar el TLCAN para evitar cualquier ley que proteja el medio ambiente, y muchas veces lo que hacen es mover sus operaciones de contaminación climática de un país a otro país, para evadir regulaciones. “Pongo como ejemplo una empresa estadounidense, de Michigan, que decidió mover su operación de reciclaje de baterías de plomo a Monterrey (al municipio Doctor González, muy cercano a la capital neolonesa); exporta su contaminación, y el efecto es de daño a la salud humana y a la ecología. Pero al medio ambiente no le importa de dónde sale la contaminación, de Monterrey o de Michigan. El daño es para el planeta”.

eu-caen-en-mexico-aqui-se-puede-contaminar) citó un texto de *The Whashington Post*, donde se mencionan estimaciones de que “una de cada cinco baterías de plomo ácido de vehículos estadounidenses terminan en plantas de reciclaje en el norte de México donde deben ser destruidas por trabajadores bajo condiciones que van desde las adecuadas hasta las abismales, según consultores estadounidenses que han estudiado la industria [...] los recicladores de metal buscan sacar provecho de los controles relativamente laxos que hay en el país sobre los niveles de exposición al plomo al que pueden someterse los trabajadores y del que puede registrarse en el medio ambiente”.

El texto dice que hay una “preocupación común entre la gente de los barrios cercanos a la fábrica [Eléctrica Automotriz Omega, en Doctor González], pues han sido detectados niveles elevados de plomo en la sangre de los trabajadores de la fábrica, así como en lotes cercanos donde niños juegan y familias crían ganado”. Y menciona el caso de una persona, Juan González Mendoza, quien trabaja en la propia empresa recicladora, y enfermó con dolores profundos en huesos y articulaciones. Análisis médicos mostraron “concentraciones de plomo en la sangre muy por encima del nivel que en muchos lugares de Estados Unidos daría lugar a remover a un trabajador. Sin embargo, González fue sólo incapacitado por nueve meses y está atrapado en una cama sin poder trabajar”.

Por otro lado, en cuanto al asunto de los tribunales Estado-inversionistas, Ben Beachy ofreció información respecto de casos donde empresas contaminantes imponen su posición y poder en confron-

taciones con los Estados donde instalan o buscan instalar sus operaciones. En esta liga pueden observarse ejemplos de casos donde empresas han usado los tribunales de los tratados de comercio para atacar leyes ambientales y otras: https://www.citizen.org/sites/default/files/egregious-investor-state-attacks-case-studies_4.pdf

Y en esta otra hay un resumen de todos los casos de este tipo que ha surgido bajo los TLC de Estados Unidos, incluido el TLCAN: https://www.citizen.org/sites/default/files/investor-state-chart_16.pdf

Un caso que puede ejemplificar es este: en 1997, Metalclad Corporation, una empresa estadounidense de gestión de residuos, demandó al Estado mexicano bajo el Capítulo XI del TLCAN, en contra de la decisión del municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, de no dar permiso de construcción para la expansión de una instalación de residuos tóxicos con base en preocupaciones relativas al ambiente y la salud. Había estudios que indicaban que los suelos del sitio eran muy inestables y eso permitiría que los residuos tóxicos se infiltraran en el subsuelo y transportaran contaminación por medio de aguas profundas. El gobierno local ya había denegado permisos similares a la firma mexicana de la cual Metalclad adquirió la instalación. Metalclad argumentó que la decisión de denegarle un permiso como empresa extranjera inversionista que opera bajo los derechos del TLCAN, equivalía a expropiación sin compensación y un “trato justo y equitativo”. El tribunal del TLCAN falló a favor de la firma, ordenando a México compensar a Metalclad con más de 16 millones de dólares, por mermar el valor de la inversión hecha por la empresa (LER).



FOTO: Edgardo Mendoza / ANEC

PREOCUPACIONES DE CANADÁ SOBRE NEGOCIACIÓN O TERMINACIÓN DEL TLCAN*

Bruce Campbell Ex director ejecutivo del Centro Canadiense de Alternativas de Políticas y profesor visitante de 2016 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa



FOTO: Edgardo Mendoza / ANEC

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, **Crystia Freeland**, estuvo en la Ciudad de México en la primera quincena de mayo para dialogar sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Es bueno que Canadá y México estén juntos frente a Trump bajo el gobierno de Justin Trudeau, más que en el de su predecesor, Stephen Harper, quien mantuvo una posición alejada de México.

Aun cuando el gobierno de Trudeau fue en principio vacilante, ahora parece comprometido con enfoque trilateral que implique solidaridad con México. Dos David contra Goliat es mejor que actuar cada uno por su lado.

La negociación del TLCAN tomó dos años. Trump dice que quiere concluir la renegociación al finalizar 2017. Lo que me preocupa es que si el gobierno de Canadá acepta este plazo, la consulta será apresurada, limitada y falta de transparencia.

Si de mí dependiera, y en un mundo ideal, yo desearía el TLCAN y negociaría una nueva fórmula; desarrollar un pacto entre los tres países.

El reloj está avanzando con su tick tack para los 90 días (que tiene el Congreso de EU para manifestarse ante el interés del Ejecutivo de ese país de renegociar el TLCAN) y que luego dé comienzo la renegociación. Nosotros tendremos una mejor idea de los objetivos de la administración Trump 30 días antes de que ese periodo expire.

¿Cuáles son las consecuencias para cada país de que el TLCAN termine? Trump es el agresor aquí. Quiere “cambios masivos” y está amenazando con desgarrar el acuerdo si no obtiene lo que quiere. ¿Qué nivel de resistencia de sus

socios en el Tratado podría llevarlo a dar marcha atrás? Es algo difícil de saber. Predecir las acciones de Trump es algo arriesgado.

El TLCAN está enfocado fundamentalmente al poder. A la transferencia del poder desde los trabajadores y de las comunidades hacia las grandes y omnipresentes corporaciones internacionales, con un poder acotado de los gobiernos que da forma a políticas públicas que concuerdan con el comportamiento de las corporaciones.

Impacto del TLCAN en Canadá. El escenario económico y social de Canadá ha cambiado dramáticamente en la era del TLCAN. Este Tratado ha jugado un rol importante en el crecimiento de la inseguridad en el trabajo y del trabajo precario; en el dramático aumento de la desigualdad en el ingreso y en la riqueza, en el estancamiento de salarios y en el achicamiento de la clase media; en la debilidad de los servicios públicos y en la caída en la seguridad social en Canadá.

Esta erosión del poder de negociación de los trabajadores ayudó a incrementar la participación del capital en el ingreso nacional y redujo la participación del sector laboral a niveles récord.

En ese marco se ha fortalecido la capacidad de las corporaciones para presionar a los gobiernos a recortar los programas sociales, los cuales, se quejaban, afectaban su competitividad.

Esto incrementó la presión sobre los gobiernos para competir entre sí por medio de subsidios y otras concesiones que atraerían y mantuvieran inversiones, utilizando para ello fondos originalmente enfocados a programas sociales.

Esto propició un dramático incremento en la concentración del ingreso y la riqueza en las corporaciones en Canadá.

Los más ricos no sólo se apropiaron de la parte del león de las ganancias comerciales, sino que también han gozado de un importante declive en sus tasas impositivas globales. Y a medida que los impuestos se han reducido, también se han achicado los gastos de programas gubernamentales.

El TLCAN no ha sido el único responsable en esos cambios, pero ha sido un hilo clave en el tejido de las políticas de reforzamiento que han facilitado el “ajuste estructural” del Estado de Canadá en línea con los requerimientos de la globalización neoliberal.

¿Qué quiere Trump de Canadá? Trump ha amenazado con imponer un impuesto compensatorio en la frontera. Nosotros deberíamos estar preparados para responderle en especie. Hay un número de disputas comerciales en marcha que podrían afectar la negociación notablemente en madera blanda, donde Estados Unidos ha establecido un impuesto preliminar de 20 por ciento con la queja de que Canadá aplica subsidios injustos para favorecer a sus productores.

Estados Unidos quiere eliminar el Capítulo 19 de “Disposiciones relativas a la solución de diferencias comerciales” y que por tanto sean paneles binacionales los que aseguren que cada país esté aplicando sus propias leyes con justicia.

También quiere que Canadá extienda las protecciones de patentes a los niveles de Estados Unidos. Esto, entre otras cosas, podría elevar el costo de las medicinas en Canadá, cuando de por sí es el se-

gundo país más caro en este rubro en el mundo.

Las demandas del sector de servicios de Estados Unidos implicarían la remoción de restricciones a la inversión extranjera en telecomunicaciones y presionarían para eliminar la excepción cultural que tiene Canadá en el TLCAN.

Asimismo, EU quiere que Canadá desmonte su sistema de administración de oferta de productos lácteos y avícolas, para dar a los productores estadounidenses acceso total a los mercados canadienses.

Trump quiere fortalecer las cláusulas existentes a “Compra América”. Si él procede, Canadá debería hacer lo mismo con sus propios programas de “Compra Canadá”.

Es difícil imaginar que la administración de Trump busque impulsar una mejora en los derechos de los trabajadores, dadas sus acciones contra el sector laboral observadas hasta ahora.

Finalmente EU ha indicado que quiere introducir cláusulas de manipulación antimonetaria en un nuevo TLCAN. Dependiendo de cómo sea definido (tasas de cambio fijas o una unión monetaria de la región de Norteamérica), esto tendría serias consecuencias adversas para México y Canadá.

La posición del gobierno de Canadá. La ministra Freeland ha fijado la posición de una preferencia en Canadá para una distribución más justa de beneficios a los trabajadores en los tres países, con la inclusión de capítulos ambiental y laboral más fuertes, no obstante ella cita las cláusulas del Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio o Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) entre Canadá y la Unión Europea, las cuales son simbólicas por mucho.

Parte de la estrategia de Canadá es una campaña masiva para educar a los políticos y empresarios estadounidenses de que el TLCAN es bueno para ellos, un enfoque basado en la ignorancia de estos personajes respecto de sus propios intereses. Hmmm...

El gobierno de Canadá también ha indicado su deseo de incrementar la cooperación para analizar reformas al sistema de controversias Estado-inversionista, y junto con otros socios, nuevas cláusulas para comercio digital.

Los empresarios continuarán presionando, igual que en el pasado, para evitar restricciones adicionales

en el flujo de cruce de frontera de productos, servicios, inversión y ciertas categorías de trabajo.

Canadá debería también estar preparando su propia estrategia de terminación de TLCAN, con una evaluación cuidadosa de los costos transicionales y los beneficios. Según se informa, este proceso ya comenzó. Algunos creen que la terminación desencadenará automáticamente una reversión de las reglas del Tratado de Libre Comercio Canadá-EU (CUSFTA), y si las pláticas terminan mal, EU pondría fin al CUSFTA también.

En mi opinión, regresar a las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en cualquier caso sería una opción preferible para manejar la relación comercial. Con esas tarifas, los exportadores canadienses enfrentarían un estimado de 3.5 mil millones a cinco mil millones de dólares de tarifas adicionales, equivalentes a cuando mucho 1.8 por ciento de las exportaciones actuales. Esto representaría un trastorno pero no sería algo catastrófico. Regresar al régimen regulatorio de la OMC sería preferible por mucho a aceptar las demandas extremas de Estados Unidos en el TLCAN.

Me parece que las fuerzas sociales y políticas de los tres países deberían buscar medidas en el TLCAN que fortalecieran el poder de los trabajadores, de las comunidades y de los gobiernos para confrontar y hacer retroceder el poder de las cooperaciones para asegurar que una participación mayor de beneficios del comercio vaya a dar a manos de los trabajadores, productores primarios y clase media.

El escandaloso mecanismo de solución de controversias Estado-inversionistas debería ser desechado. Ha sido negativo, con escalofriantes efectos en la política pública y en la regulación.

Debería haber un capítulo de estándares ambientales fuerte y exigible, que tendría que contener compromisos obligatorios para reducir las emisiones de carbón consistente con el Acuerdo de París y sanciones por violaciones.

Fortalecer las normas contenidas en el TLCAN desalentaría a las empresas a salir de la región para aprovechar los derechos laborales y los estándares ambientales más débiles en terceros países. 🐾

*Reflexiones expresadas durante el Encuentro de Organizaciones Sociales Canadá, Estados Unidos, México. Por Nuevas Formas de Cooperación Internacional (26 y 27 de mayo).

LIBRE COMERCIO, CANADÁ RURAL Y CÓMO EVITAR QUE CANADÁ SEA TRUMPEADO

Jan Slomp Presidente de la National Farmers Union (NFU) de Canadá

Durante las décadas transcurridas desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) Canadá-Estados Unidos, y después el TLCAN, la agricultura canadiense ha experimentado un cambio significativo. En el pasado tuvimos una multiplicidad y diversidad de líderes económicos locales y regionales, pero ahora tenemos un modelo de producción de *commodities* de bajo precio, conducido por los exportadores. Las necesidades de capital agrícola se han disparado, como lo demuestra la deuda masiva agrícola de 90.000 millones de dólares canadienses. Los inversionistas no agrícolas controlan cada vez más las tierras de cultivo de Canadá. La producción - por finca, por acre y por trabajador - se mantiene creciente. Y esa producción se volvió cada vez más dependiente de las exportaciones y los transportes, dado que la desregulación impulsada por el TLCAN aceleró la consolidación y la propiedad transnacional de la infraestructura de comercialización y procesamiento. El número de agricultores está disminuyendo ominosamente, pero los gobiernos y la mayoría de los grupos agrícolas de *commodities* y de las corporaciones agroindustriales se muestran eufóricos ante cada acuerdo comercial firmado y ante las crecientes exportaciones.

Lo que falta en este escenario son algunos hechos muy aleccionadores.

Las cooperativas agrícolas que manejaban y procesaban sus productos, que en algún momento fueron poderosas, han sido desmanteladas y absorbidas por un puñado de empresas transnacionales. El 80 por ciento de la capacidad de los almacenes terminales de Vancouver fue propiedad y era operado por grupos campesinos. Ahora el sector privado es dueño de todo. Luego de que desapareció la Junta Canadiense de Trigo (Canadian Wheat Board), no hay participación económica real de los agricultores más allá de las granjas, ni hay autoridad que arbitre y regule a los ferrocarriles. Los agricultores, que en algún tiempo condujeron la mayor parte de la industria de granos de Canadá, ya no tienen una conexión directa con los clientes y usuarios finales que pagan el valor real de mercado de su producto.

Bajo el TLCAN, el sistema regulador de Canadá facilitó la integración en América del Norte del sacrificio, procesamiento y comercialización de cerdo y res, a expensas de los procesadores regionales y locales, de los vendedores y de los empleos que ellos proporcio-



Jan Slomp

naban. A pesar de los acuerdos comerciales, las exportaciones canadienses siguen en desventaja debido a los costos de transporte.

Al margen de los sectores de gestión de la oferta, y con un breve repunte después de 2009, los ingresos agrícolas netos ajustados a la inflación han sido desastrosos. Las comunidades agrícolas de Canadá están sufriendo un declive económico crónico. Esto fue camuflado por trabajos de manufactura fuera de las granjas en la región central de Canadá y por empleos del sector de recursos en el oeste de Canadá, pero esos trabajos ya no son fáciles de conseguir. La decadencia de la economía rural de Canadá no se discute a menudo, pero cuatro décadas de pérdidas -de elevadores, servicios ferroviarios, concesionarios de maquinaria, fabricación, procesamiento y proveeduría de insumos, servicios comunitarios esenciales y puntos de venta minoristas- han deteriorado paulatinamente la calidad de la vida rural. Los recortes presupuestarios del gobierno a la investigación agrícola, a las inversiones públicas de reproducción vegetal, a la Prairie Farm Rehabilitation Administration (PFRA, Administración de Rehabilitación de Granjas de Pastoreo) y a los servicios públicos de extensión han agravado aún más las perspectivas. El declive del Canadá rural es duro y se le da poca atención, si se compara con la calidad de vida rural en otros países desarrollados.

La creciente dependencia de Canadá de las importaciones de alimentos es otro hecho aleccionador. Podemos cultivar muchos de esos productos, pero hemos perdido nuestro propio mercado

porque los acuerdos comerciales ayudan a las empresas integradas de alimentos a operar a través de las fronteras, deprimiendo los precios para los productores mientras controlan el precio al consumidor. Los acuerdos comerciales también recompensan el sobre-procesamiento de los alimentos mediante la sustitución de ingredientes básicos por grasas más baratas, aceites vegetales, lecitina de soya, almidón de maíz, fructosa e ingredientes modificados de leche. De ahí el famoso sobre-consumo de alimentos procesados en América del Norte. Si el libre comercio facilita la eficiencia, como se afirma, ¿por qué la brecha entre los precios al productor en la granja y el supermercado es cada vez mayor?

El presidente Trump acusa con desprecio a México por la pérdida de empleos en Estados Unidos, pero se le olvida mencionar a las compañías estadounidenses que acudieron a las maquiladoras mexicanas para aprovechar los bajos estándares laborales y ambientales. El TLCAN permitió a Estados Unidos inundar México con su maíz, cerdo, pollo, carne y lácteos altamente subsidiados, destruyendo el sustento de millones de agricultores mexicanos. Muchos emigraron posteriormente (a menudo de forma ilegal) para convertirse en mano de obra súper explotada en campos, fábricas y plantas empacadoras de carne de Estados Unidos.

El presidente Trump probablemente encontrará razones para rechazar el producto canadiense que cruza la frontera, por lo que es muy importante que el primer ministro Trudeau esté preparado para lo peor y aplique la mayor diplomacia en el trato con la administración Trump.

Es importante entender que el TLCAN nunca fue el huevo de oro que sus promotores pretendían que fuera, ni tampoco lo son los otros acuerdos de libre comercio firmados a partir de entonces. El TLCAN ha causado muchos daños a la economía rural canadiense y el presidente Trump probablemente va a agregar más problemas. Lo último que necesita el Canadá rural es ceder más a Estados Unidos en un intento por persuadir a este país de que no se salga del TLCAN. Es hora de que nuestro primer ministro deje de comerciar con los medios de vida de los agricultores canadienses y comience a reparar el daño que estos tratados han hecho, para que nuestros mercados nacionales e internacionales puedan funcionar de una manera tal que la actividad agrícola sea rentable otra vez.

La decadencia de la economía rural canadiense debe ser revertida. Si el primer ministro Trudeau quiere impedir la elección de un líder canadiense como Trump en tres años, tendrá que empezar a arreglar las cosas en las zonas rurales de Canadá. Necesitamos una agenda agrícola que dé prioridad a la calidad de vida rural y dé viabilidad a las granjas familiares. 🍷

FOTOS: Edgardo Mendoza / ANEC



TLCAN: LOS CANADIENSES SE REENCONTRARON EN CDMX*

Rick Arnold Miembro de Fronteras Comunes de Canadá y uno de los representantes del Capítulo del Condado de Northumberland del Consejo de Canadienses rickardarnold@icloud.com

El evento fue el Encuentro de Organizaciones Sociales de Canadá, Estados Unidos y México, que se realizó los días 26 y 27 de mayo de 2017, y que reunió a unas cien organizaciones provenientes de los tres países, entre las cuales había unos 17 representantes recién llegados de Canadá y Quebec. *El momento* resultó ser una reunión un día antes del comienzo oficial del encuentro, en donde casi todos los canadienses y quebequeses estuvieron presentes. *Y el reto* que nos enfrentaba... un reencontro con un trabajo de oposición coordinado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN (TLCAN) que antes existía en Canadá, pero cuya expresión ya era tan clara.

Telón de fondo: La elección federal canadiense de 1988 resultó ser una nutrida batalla electoral entre el pro TLC partido Conservador Progresista y otros dos partidos (Liberal y Nuevo Demócrata) que llamaban al electorado a no votar a favor del tratado Canadá-Estados Unidos. Aunque el voto final combinado favoreció al no-al-TLC (52 por ciento contra 43 por ciento), la idiosincrasia del sistema parlamentario otorgó una mayoría a los conservadores y no dudaron en implementar el acuerdo.

Las elecciones federales posteriores ocurrieron en 1993, al tiempo que el Partido Liberal llegaba al poder después de haber prometido que renegociarían el recién firmado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Al poco tiempo de ser instalado como primer ministro de Canadá, Jean Chretien faltó a su palabra y promovió un voto a favor de la

implementación del TLCAN (sin cambios) para que entrase en vigor el primero de enero de 1994. Después de esas dos elecciones y con la complacencia de los medios, las grandes empresas en Canadá se han encargado a lo largo de los 23 años recientes de promover campañas de (des)información en donde aseguran que el TLCAN es innegablemente una maravilla para el país.

Algunas de las redes y organizaciones canadienses podrían fácilmente argumentar que ya figuraban en la lucha cuando se intentó a descarrilar el tratado precursor al TLCAN (entre Canadá y Estados Unidos), pero el panorama de confrontación al neoliberalismo y su arma preferida, los tratados de libre comercio, ha cambiado sustancialmente en las tres décadas pasadas.

Aun antes de la derrota en 2005 del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) por iniciativa de las fuerzas populares del hemisferio, Canadá ya había firmado una serie de acuerdos bilaterales. En fechas recientes Canadá tomó parte en la negociación multilateral del Acuerdo Transpacífico de Cooperación (TPP, ahora puesto en duda por Trump), y en el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, conocido como el Acuerdo Económico y Comercial Amplio. Producto de la necesidad de responder a todas estas iniciativas comerciales diversas promovidas por el gobierno neoliberal canadiense, nacieron nuevas redes/organizaciones que hábilmente han realizado investigaciones, y educan y movilizan para combatir las negociaciones de libre comercio denominadas de "segunda generación".



Con este trasfondo histórico, no es sorprendente que la aparición en 2016 del candidato Trump (y de Bernie Sanders) con promesas de renegociar (o eliminar) el TLCAN sirvió para que el movimiento popular canadiense encontrara una puerta entreabierta por donde se pudiese filtrar con el objetivo de reemplazar al TLCAN tóxico con algo nuevo, construido "de abajo hacia arriba".

Fue entonces que el 25 de mayo de 2017, en una reunión de dos horas realizada en la Antigua Escuela de Medicina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, las organizaciones y redes de Canadá y Quebec se sentaron a escuchar y a compartir. Una ronda de presentaciones, con énfasis en el trabajo

que cada cual pensaba desarrollar para combatir un tratado trinacional que no había cumplido con las promesas y expectativas de prosperidad anunciadas para los trabajadores del campo y la ciudad, sirvió para señalar que existía un traslape significativo entre iniciativas de libre comercio mencionadas.

Luego de un "jaha!" inicial, la conversación se inclinó hacia la posibilidad de encontrar nuevas sinergias para coordinar y hacer más efectivo el trabajo relacionado con la "renegociación" del TLCAN. Un referente clave para nuestras reflexiones sobre opciones para coordinar mejor el trabajo en Canadá y Quebec resultó ser la ingeniosa campaña *México mejor sin TLCs*.

Nos comprometimos a sostener una segunda reunión a finales de junio en Ottawa para avanzar en la construcción de nuevas relaciones sociales, comerciales y políticas de Canadá/Quebec, y entre nuestros tres países.

Gracias al hecho de haber podido discutir nuevas fórmulas de colaboración en lo nacional, las 17 organizaciones canadienses se lanzaron con ánimos para ayudar a garantizar el éxito pleno de las deliberaciones de los días 26 y 27 de mayo en el Encuentro de Organizaciones Sociales de Canadá Estados Unidos y México. 🇨🇦

*Las opiniones expresadas en este artículo son solamente del autor.



FOTO: Edgardo Mendoza / ANEC

TRABAJAR JUNT@S CONTRA LA CODICIA DE LAS GRANDES TRASNACIONALES

Amélie Nguyen Centre International de Solidarité Ouvrière (CISO), Québec-Canada nguyena@ciso.qc.ca

El Centro Internacional de Solidaridad Obrera (CISO) es una organización intersindical de solidaridad internacional de Québec. Su mandato es defender los derechos laborales mediante la creación de una mayor conciencia de las dinámicas estructurales —económicas, políticas y sociales— que amenazan el respeto de los derechos de l@s trabajador@s en Québec y del mundo.

No tenemos hoy día un sistema que funcione para l@s trabajador@s. Más bien es un sistema que defiende y promueve los intereses, las ganancias y el poder jurídico y político de las grandes empresas, y bloquea la creación de procesos democráticos. Desde su creación, el CISO ha generado un mensaje a favor de la autodeterminación de los pueblos. El reciente encuentro trinacional, enfocado a analizar la pronta renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tuvo una participación muy diversa de los tres países con representantes de sindicatos, organizaciones campesinas y de consumidores, movimientos ciudadanos y de la sociedad civil en general, y podría lograr un alcance mucho más importante y profundo que únicamente la lucha en contra de este tratado específico.

1. Solidaridad más allá del libre mercado y a largo plazo

Durante el encuentro, los representantes mexicanos hicieron llamados constantes a crear un bloque solidario entre los movi-

mientos sociales de los tres países no sólo en cuanto al TLCAN, sino más allá, en la defensa conjunta de los derechos humanos y las luchas sociales de las poblaciones.

Las discusiones expusieron el hecho de que las violaciones de los derechos humanos están aumentando día a día en México. Ello se expresa por varias vías: una violencia generalizada y normalizada que implica mayores agresiones hacia las mujeres y hacia las voces disidentes; una impunidad casi total para quienes cometen crímenes violentos; la destrucción de las formas de vida de l@s campesin@s e indígenas, a fin de propiciar la desesperación necesaria para proveer mano de obra barata a los intereses privados, muchos de ellos extranjeros; la corrupción dentro del aparato del Estado, y la pervisión de los sindicatos, de aquellos denominados “blancos” y “amarillos o verticales”, que son los que predominan (no hablamos aquí de los sindicatos independientes, que luchan admirablemente y con riesgos en un contexto muy difícil).

Lo que salió del encuentro es que debemos ver el momento actual como una oportunidad. Los grupos mexicanos han aprendido a funcionar en un ámbito violento, en el cual la libertad de expresión está en riesgo, y donde pesa mucho el asombroso poder corporativo, que es apoyado por leyes que cristalizan su influencia y sus beneficios futuros. Por necesidad, han aprendido a organizarse a veces clandestinamente, a ser creativos, a adaptarse a condiciones que cambian a veces rápidamente, a



FOTOS: Edgardo Mendoza / ANEC

no parar aunque haya obstáculos. De esta sólida y durable experiencia de resistencia, grupos de Québec, Canadá y Estados Unidos tenemos mucho que aprender. Este podría ser el momento de dar reversa a las dinámicas neocolonizadoras, y cuestionar seriamente las relaciones históricas de poder que favorecen a las elites del Norte. ¿Por qué? Porque ya en el pasado l@s mexican@s han confrontado muchas veces la derechización de las políticas, la discriminación y la represión.

2. Pensar y actuar de manera trinacional

Durante las discusiones se sugirió que había que cambiar profundamente las maneras de pensar y de actuar. Los grupos mexicanos pro-

pusieron una agenda trinacional de trabajo. Esa expresión implica que debemos planear las luchas de cada país tomando en cuenta las repercusiones en los otros dos países, y habiendo aprendido ya de los impactos muy dañinos del TLCAN para l@s trabajador@s de América del Norte. Esto quiere decir que debemos tomar en cuenta los potenciales impactos trinacionales de los TLCs; las potenciales deslocalizaciones; las desiguales condiciones de trabajo y de salario; los vínculos entre el *dumping*, la destrucción de la agricultura, las desposesiones de los territorios, la industrialización y la destrucción de la economía local con la tendencia a priorizar el flujo de inversiones extranjeras y las exportaciones; la relación de esto último con el creciente extractivismo, y la profundización de la crisis

de derechos humanos en México, tanto los civiles, como los políticos, económicos, culturales y sociales. Es necesario entonces establecer acuerdos entre organizaciones para impulsar juntos mejores condiciones para la población, y en especial para la clase obrera de México, el país en el cual el TLCAN seguramente ha tenido los impactos más fuertes.

3. Un modelo alternativo

Por supuesto, lo más complejo será construir una propuesta común y convencer a la población; esto, en un ámbito en el cual la ideología neoliberal sigue siendo hegemónica. A esto estamos convidados en los próximos meses, con toda nuestra escucha, creatividad y solidaridad. 🗣️



EN ALERTA, ASOCIACIONES DE MIGRANTES EN EU; EXIGEN TAMBIÉN RESPETO Y LEGISLACIÓN JUSTA EN MÉXICO



Yolanda Zoraida Ávila Toledo

La situación que viven los migrantes en Estados Unidos es diferenciada según la ciudad y/o el estado donde se ubiquen: mientras en Texas hay redadas, y en Missouri o Tennessee, que son eminentemente republicanos, las autoridades están intentando establecer medidas sumamente restrictivas para los migrantes indocumentados, en otros lugares, como Chicago, que es una

ciudad santuario se observa calma y no se han registrado redadas.

Como quiera que sea, las organizaciones de migrantes y/o de apoyo a migrantes en Estados Unidos están alertas y trabajan muy intensamente informando a la gente qué hacer y qué no hacer en caso de que sean acosados o detenidos por autoridades de migración.

Así lo comenta Yolanda Zoraida Ávila Toledo, directora ejecutiva de Casa Michoacán, presente en Chicago, y miembro de la Red Nacional Alianza Américas.

“Desde nuestro espacio, siendo una organización sin fines de lucro que da servicio a la comunidad, hemos notado el incremento de solicitudes de asesoría para temas legales, sobre todo por el miedo que tiene la gente ante la posibilidad de que la deporten. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasará con mis hijos, con mis propiedades. ¿Cómo me voy a preparar?, se preguntan. Y es que desde la llegada de Trump al poder se han incrementado los procesos de xenofobia y racismo, en especial contra los mexicanos y los que se les parezcan; eso hace que algunos grupos se sientan amenazados.

“Esto nos ha puesto en alerta a las organizaciones civiles que trabajamos con migrantes y estamos entrándole al tema de informar lo que debe y no debe hacer frente a la autoridad migratoria. Tenemos talleres de ‘conozca sus derechos’ e impulsamos alianzas con el Consulado mexicano, con universidades, iglesias, organizaciones de fe, pues todos ellos también trabajan con la comunidad. Estamos además haciendo alianzas con migrantes de otros países: musulmanes, asiáticos, árabes, polacos... porque es un tema de migrantes, y trabajamos en cabildeo con otras ciudades para que también se comprometan a ser ciudades santuario protegiendo a nuestra comunidad”.

De acuerdo con la entrevistada a más de cien días de Trump en la Presidencia de Estados Unidos aún no pasan muchas cosas con las que amenazó este personaje a los migrantes y a otros sectores, y “habrá que ver si ocurren”, pues Trump enfrenta el riesgo del *impeachment* y situaciones como el conflicto con el ex director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), James Comey, han debilitado su credibilidad. “Está cavando su propio hoyo”.

Pero la crítica de Yolanda Ávila no es sólo para el gobierno de EU y sus políticas antimigrantes, sino también para la actitud que se tiene en México respecto de sus emigrados.

Precisó que del total de mexicanos que viven en Estados Unidos, 4.5 millones provienen del estado de Michoacán y de ellos dos millones están en la región del medio oeste, alrededor de Chicago. Y dijo:

“México tiene deuda con la población mexicana que está en Estados

Unidos. En México hay una Ley de Migración que en realidad es una ley de extranjería, no es una ley que considere a los mexicanos en el exterior, y por ahí tenemos que empezar a modificar. Mi estado definitivamente está en deuda con los michoacanos emigrantes. Somos un sector que aportamos económicamente tanto a Estados Unidos como a México y a Michoacán. Las cuantiosas remesas de los migrantes son reflejo del poder económico que podemos tener. Pero debemos seguir trabajando en el poder político.

“Michoacán debe ser un estado binacional, pues hay otro Michoacán en EU, y los migrantes necesitamos tener representación y representatividad; el tema de la población migrante debe ser transversal dentro de todas las organizaciones, dentro de todas las secretarías. Y hablar de un estado binacional quiere decir que haya acciones, que existan presupuestos, que haya programas, atención. Michoacán es el principal estado expulsor de migrantes a EU, pero también ahorita es primer receptor de remesas y de deportados.

“No nos gusta que México esté muy preocupado por el tema de migrantes, porque vienen, nos visitan, generan su agenda migrante... pero en el propio territorio mexicano no se están respetando los derechos de la población migrante. México es un país binacional y por tanto debe respetar en principio los derechos de los migrantes internos, y también los de quienes están en tránsito.

“México tiene [igual que EU] una posición también retórica, xenofóbica y racista que vemos en el tema de migrantes. Cuando dicen que quieren ayudarnos y protegernos, decimos que hay que empezar por una ley de migración que proteja y respete los derechos humanos de los migrantes. Hay que predicar con el ejemplo. Y propiciar un sistema económico inclusivo, equitativo. No es que la migración vaya a desaparecer, es parte de la historia del ser humano, pero debemos tener claro que si nuestra gente sigue migrando es por la situación económica y por los altos niveles de pobreza y porque se va buscando mejores oportunidades... aunque ahora las mejores oportunidades ya no lo son, el *American dream* es un mito. Debemos trabajar en programas de desarrollo para nuestras comunidades, que sean sustentables para que la comunidad deje de estirar la mano esperando una remesa, que tenga las oportunidades de crecimiento y desarrollo económico. Sólo así podremos hablar de que hay posibilidades en nuestro propio país” (LER).

AGENDA RURAL

Evento: 1er Encuentro Nacional de Responsabilidad Compartida. Organiza: URGENCI. Fecha y lugar: Del 6 al 8 de julio de 2017, Morelia y Pátzcuaro, Michoacán. Informes: urgencilatinoamerica@gmail.com / david.monachon@gmail.com

Evento: XIV Simposio Internacional y IX Congreso Nacional de Agricultura sostenible “Agricultura sostenible como base para los agronegocios”. Fecha y lugar: Del 25 al 30 de septiembre de 2017, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora (Unidad Nánari), Cd. Obregón, Sonora, México. Información: www.somas.org.mx



Libro: En la senda del TLCAN: Una visión crítica Editado por RMALC y la Universidad de Sonora. Coordinadores: Juan Manuel Sandoval Palacios y Miguel Ángel Vázquez Ruiz. <http://www.rmalc.org/wp-content/uploads/2016/05/Libro-En-la-senda-del-TLCAN.pdf>



Libro: Sujetos rurales: Retos y nuevas perspectivas de análisis. Coordinadoras: Beatriz Canabal Cristiani y Martha A. Olivares Díaz. Editado por Itaca y UAM-X.

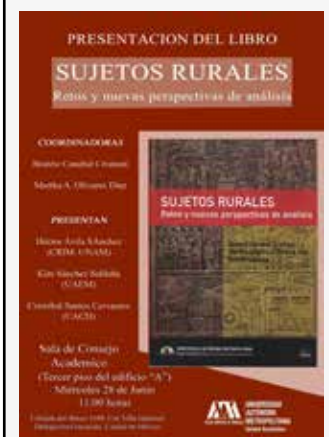


FOTO: Tomas Castelazo

FAMILIAS DESPLAZADAS DEL PETÉN, GUATEMALA, EXIGEN JUSTICIA Y REPATRIACIÓN

Lorena Paz Paredes

El pasado viernes 2 de junio más de 400 personas de la comunidad de San Andrés en Laguna Larga, municipio de La Libertad, en la zona de la Reserva de la Biosfera Maya del Petén, Guatemala, fueron desalojadas de sus tierras y desplazadas de manera violenta. En la operación participaron cerca de mil 500 efectivos del ejército y la Policía Nacional Civil de Guatemala.

Al enterarse del desalojo, las familias huyeron de su comunidad, atravesaron la selva y cruzaron la línea fronteriza de México hasta llegar a la altura del municipio de Candelaria, Campeche, a siete kilómetros del ejido El Desengaño.

Según observadores de organizaciones defensoras de derechos humanos, las familias desplazadas se encuentran en “un campamento improvisado en condiciones de emergencia humanitaria”, pues la gente ha tenido que usar plásticos como único techo en plena temporada de lluvias, y han recurrido a la solidaridad de comunidades cercanas y organizaciones civiles.

Un censo preliminar registra más de cien familias alojadas en condiciones precarias, cerca de 450 personas, de las que 120 son niños, 82 adolescentes y 15 menores de un año, que ya empiezan a padecer enfermedades gastrointestinales

y cutáneas, varicela y paludismo, por las malas condiciones.

A pesar de que una comitiva del gobierno de México y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), elementos de seguridad federal y del Instituto Nacional de Migración, estaban enterados, sabían del arribo de los desplazados y los recibieron, no les proporcionaron los recursos que demanda esta situación de emergencia humanitaria.

En este trance humanitario han estado presentes organizaciones en defensa de los derechos humanos de Guatemala y México, como Equipo Indignación, de Yucatán; La 72 Hogar Refugio para personas migrantes, de Tabasco; Resistencia Civil de Candelaria, de Campeche; Voces Mesoamericanas; Acción con Pueblos Migrantes, de Chiapas, que han difundido y apoyado a las familias desplazadas, y por distintas vías exigen a los gobiernos de México y Guatemala cumplir la obligación de proteger la vida y los derechos de las familias desplazadas.

En un recorrido por San Andrés, los observadores humanitarios constataron los injustificados destrozos que hizo el ejército en Laguna Larga. “Las viviendas fueron quemadas, algunas humeaban todavía, y otras taladas, destrozadas las áreas comunes y destruidas la

escuela y las iglesias”, lo mismo sucedió con los sembradíos, una saña que recuerda los tiempos del genocidio guatemalteco.

Además priva el desasosiego en la zona de la Reserva Maya del Petén pues hay amenazas de desalojo contra otras comunidades como El Reloj, El Sacrificio y La Mestiza, asentadas en Áreas Protegidas de la Laguna del Tigre y Sierra Lacandón.

¿Qué pasa? El gobierno guatemalteco pretende el “rescate” de una zona protegida conforme a la Ley de Áreas Naturales, y califica a las poblaciones asentadas ahí desde antes de que se conformara la Reserva Maya como ilegales y usurpadoras. Alma Polanco Solís, directora regional del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) declaró que familias procedentes de Cobán y Quiché invadían y habitaban de forma ilegal el área conocida como Laguna Larga, en el Parque Nacional Laguna del Tigre, en San Andrés, por lo que se procedió a su recuperación y vigilancia para evitar nuevas invasiones.

Pero a la vez que el Estado guatemalteco desaloja poblaciones campesinas de la zona de amortiguamiento, permite y cobija la operación de la petrolera Perenco Guatemala Limited, filial de la compañía anglo-francesa de pe-

tróleo y gas PLC, que desde 2001 extrae petróleo en el campo Xan, ubicado en la Laguna del Tigre, a pesar de los derrames y de que está contaminando los mantos acuíferos de agua dulce más importantes de Mesoamérica.

A PESAR DE QUE UNA COMITIVA DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), ELEMENTOS DE SEGURIDAD FEDERAL Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, ESTABAN ENTERADOS, SABÍAN DEL ARRIBO DE LOS DESPLAZADOS Y LOS RECIBIERON, NO LES PROPORCIONARON LOS RECURSOS QUE DEMANDA ESTA SITUACIÓN DE EMERGENCIA HUMANITARIA.

Recientemente Perenco consiguió ampliar su permiso extractivo por 15 años. Todo ello hace pensar a las comunidades y organizaciones civiles de apoyo que los desalojos no responden a una política gubernamental “de conservación mal enfocada y aplicada”, sino a la pro-

tección de intereses geopolíticos.

En la comunidad de Laguna Larga sorprendió el operativo de desalojo, pues es un asentamiento de más de 15 años reconocido por el propio gobierno de Guatemala, y cuenta con documentación probatoria. Además, los pobladores se lamentan de que no hubo un diálogo con las autoridades previo al desalojo. Ciertamente desde hace años han sido hostigados por la CONAP, e incluso uno de sus líderes fue asesinado hace una década en este contexto conflictivo.

Según la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centro América, “la política del Estado de Guatemala de desalojar a las comunidades, contraviene el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y el Estado de Guatemala debe ser declarado responsable y reparar los daños causados”. También preocupa a esta Comisión que el Estado haya desoído una propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible de las comunidades afectadas por la declaratoria de Áreas Protegidas.

No obstante ya han empezado las negociaciones para el retorno de los desplazados. El 8 de junio en el campamento se reunieron con los afectados representantes del gobierno de Guatemala, de la Comisión Nacional de Diálogo, de la Oficina de Asuntos Agrarios y del Consulado de Guatemala en México.

Las familias desplazadas exigen que se haga justicia y que se les permita regresar a sus tierras. Quieren garantías para su retorno, reparación de daños, retiro del ejército y asistencia humanitaria, y se resisten a ser reubicados. Aunque sus peticiones no se resolverán sino hasta el día 20 de junio en una segunda reunión con autoridades gubernamentales y líderes de ésta y otras comunidades de la Reserva, de inmediato el gobierno guatemalteco envió la primera entrega de alimentos y carpas al campamento.

Los líderes comunitarios y las organizaciones civiles están convencidos de que en la próxima reunión se decidirá no sólo el futuro de las familias desplazadas de Laguna Larga sino de otras comunidades amenazadas en la zona de la Reserva Maya, y que mientras no cese el hostigamiento militar y autoritario de la CONAP, y el gobierno no reconozca el derecho de las poblaciones a permanecer, proteger y cuidar ellas mismas esta zona, no será posible remontar el conflicto y alcanzar la paz.



FOTO: Prensa Libre

CHILE

A NUEVE MESES DE LA MUERTE DE MACARENA VALDÉS

SEGUIR EN PIE

Felipe Montalva

Los procesos judiciales, paralelos, se desarrollan en estos meses con epicentro en Tranguil, la comunidad localizada en la precordillera de Panguipulli, sur de Chile y escenario de la instalación de una central hidroeléctrica de pasada por parte de la empresa austro-chilena RP Global (también denominada RP El Arroyo). Un episodio resonante en la invasión de emprendimientos energéticos en territorio mapuche (Ver *La Jornada del Campo* 112, enero 2017).

Uno es la investigación, por parte de la Fiscalía (entidad estatal encargada de la investigación de delitos), en pos de aclarar la muerte de Macarena Valdés, pareja de Rubén Collío, *werken* (vocero) de la comunidad Quillempán, ocurrida en agosto del año pasado. La pareja había encabezado la oposición a la construcción de la hidroeléctrica. Un par de semanas luego de una manifestación en la carretera, Macarena fue hallada sin vida, colgando desde el cuello a una viga, al interior de su casa, en Tranguil. Días antes, lugareños que trabajaban para RP Global advirtieron a la propietaria del terreno donde residía la familia que desalojara al *werken*, además de que profirieron mensajes amenazadores en su contra.

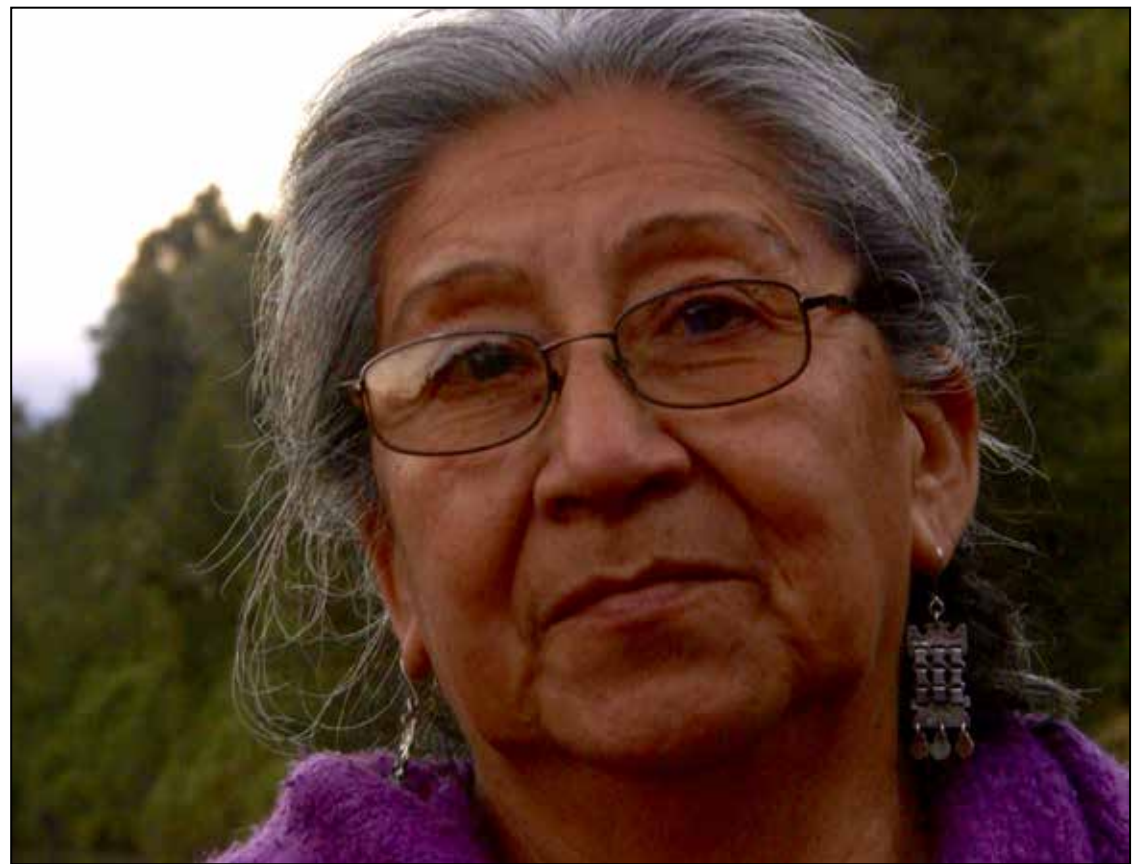
A fines de 2016, Rubén Collío presentó una querrela criminal contra todos quienes resulten responsables. Tras un intento de la Fiscalía por cerrar el caso, argumentando que se trataba de un suicidio, en marzo pasado la presión social le obligó a proseguir su trabajo. “Pasó algo curioso. Nadie [en este juicio] ha nombrado a RP Global, pero por esta querrela presentaron un abogado que los representará”, cuenta Rubén Collío. Una diligencia futura es una nueva autopsia. Para dicho procedimiento, la Fiscalía está en conversaciones con un médico legista. Algunas organizaciones mapuche han realizado actividades para juntar dinero con ese fin.

Collío continúa trabajando como orfebre mapuche y vive con sus cuatro hijos, en su casa de Tranguil. Señala que le interesa despersonalizar lo ocurrido: “No busqué esto. Fue una comunidad que me pidió ser *werken* y ayudarlos contra la empresa”. Reconoce que este periodo ha sido difícil: “Me costó retomar mi rol y asesorar a la comunidad. ¿Qué era lo que se buscaba con asesinar a Macarena? ¿Infundir miedo, desarticular y desestabilizar la lucha que se

estaba dando en el sector cordillero? Hoy no tenemos miedo. La pena, la rabia y el amor son energías que uno puede reconducir hacia cuestiones positivas. Seguimos en pie”, cuenta.

Como un caramelo. El segundo juicio es la demanda que la comunidad mapuche Quillempán presentó contra RP Global por usurpación de tierras. La empresa edificó la hidroeléctrica sin permiso, en un terreno perteneciente a la comunidad. Aún más: ignoraron la existencia de un antiguo cementerio mapuche, un *eltun*. Se debe recordar que los comuneros han denunciado que RP Global posee más de una razón social. De ahí su segunda denominación como RP El Arroyo. Una acción distractora, sostienen. Julia Quillempán, representante de la comunidad, resume: “Buscamos que devuelvan el terreno y saquen la planta”.

Por tal motivo, a solicitud de los comuneros, la Corporación Nacional Indígena (Condi, ente estatal chileno encargado de asuntos vinculados a pueblos originarios) realizó un estudio antropológico sobre los predios donde existían los cementerios perjudicados por la hidroeléctrica. “Fueron vulnerados nuestros derechos como mapuche, y como sujetos de derecho internacional, establecido en el Convenio 169 [de la Organización Internacional del Trabajo]”, argumenta Rubén Collío.



Julia Quillempán

FOTO: Carlos Morales

La central, de 2.9 megavatios de generación, hoy luce concluida pero no ha iniciado funciones. Se aprecia un cuidador hermano de Julia Quillempán que revela las divisiones que la empresa causó en la comunidad. Las relaciones continúan malheridas entre los habitantes. No obstante, las amenazas telefónicas contra la mujer mapuche y su esposo, Alejandro Castillo, parecen haber concluido desde febrero pasado. El *modus operandi* de RP Global para ingresar a este territorio se emparenta con el de otros proyectos hidroeléctricos en los años recientes: un vecino conocido es contratado por la empresa para que convenza a los lugareños de las bondades del emprendimiento. En tal gestión

confluyen las relaciones familiares y sociales que esa persona tenga.

“Ellos [los que apoyan el proyecto] creen que con tener una planta tendrán una fuente de trabajo para toda la vida. [La empresa] vino acá y les ofreció por dos años... La planta estuvo lista al año y medio. También dijeron que habría electricidad gratis. Otra mentira”, señala Julia Quillempán.

Enérgica, la mujer ahonda sobre este factor humano. Sus palabras retumban: “Nos envuelven como si fuéramos un caramelo para dárselo a los monos. Mapuche y no mapuche no se dan valor con sus tierras. Muchos no siembran ni una mata de cilantro. Todo es

comprar y comprar. Ahora llega la empresa y los tontos le creyeron”.

Derechos expandibles. Tranguil parece ser la punta de lanza de una ofensiva energética de impredecibles consecuencias. “Tenemos claridad que vienen innumerables proyectos hidroeléctricos de este tipo. Están los derechos de agua pedidos. Nos lo ha confirmado la Dirección General de Aguas (DGA)”, señala Rubén Collío. Hasta el año pasado, DGA informaba de 135 solicitudes realizadas por particulares para fines hidroeléctricos. La peculiaridad de Panguipulli, su gran cantidad de ríos, esteros, lagos y montes, así como una deslumbrante selva nativa fría, ha atraído a estos inversionistas.

Revelador del actuar de RP Global es que el proyecto inicial solicitaba derechos de agua en el río Tranguil por dos kilómetros. Luego han solicitado que se amplíe a cuatro y hoy a ocho kilómetros. “Desde la bocatoma hasta la sala de máquinas hay ocho kilómetros”, señala Rubén Collío. Ahí radica la razón por la que la planta aún no opera. “Están esperando los cuatro kilómetros que les faltan. Como comunidad nos oponemos a que les den esos derechos de agua. Se lo pedimos formalmente a la DGA”, cuenta.

Una reforma a la legislación de aguas, que data desde la dictadura y que permite que cualquier privado solicite derechos de usos “no consumptivos”, que —fácticamente— ha privatizado ríos y esteros, se encuentra en tramitación en el Parlamento chileno desde el año pasado.

“Nos quieren destruir nuestro paraíso, y si no nos organizamos va a ser demasiado tarde”, señala Rubén Collío. 🍌



Camino y tendido en Tranguil

FOTO: Felipe Montalva